

1.5. LA REGIÓN LIMA METROPOLITANA

Este capítulo presenta los diferentes procesos, actores y escenarios que caracterizaron a Lima Metropolitana entre 1980 y el 2000, configurando la dramática experiencia del conflicto armado interno desatada en la capital. No resulta difícil imaginar cuál era el significado político y militar del accionar subversivo en la capital pues desde el inicio de la guerra interna, las acciones en las ciudades tuvieron la mayor importancia en los planes de los grupos subversivos, particularmente el PCP-SL. Sin embargo, es a partir de la segunda mitad de los ochenta que su accionar en las ciudades va a adquirir una nueva dimensión y frecuencia, de tal manera que entre 1982 y 1987 el número de acciones sediciosas en Lima fue superior al que hubo en Ayacucho. Posteriormente, entre fines de 1989 y la primera mitad de 1992, la ciudad de Lima se convertiría en el escenario de lucha priorizado por los grupos subversivos, en especial el PCP-SL, tanto por el incremento de una variedad de acciones y atentados subversivos, como por la consolidación de una significativa presencia en los sectores populares, hechos que parecían ser la cristalización del cerco a la ciudad que Abimael Guzmán anunciara en la «Entrevista del siglo» (1988) como parte del equilibrio estratégico.

Prácticamente desde el inicio de la guerra interna, las acciones subversivas en Lima tuvieron una importancia decisiva, por ser la principal caja de resonancia de estas acciones, constituyendo un espacio vital para la gestación y formación de militantes, cuadros políticos y combatientes del PCP- SL y luego del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru, mientras que las fuerzas del orden, amparadas por leyes de emergencia, contribuyen a su vez a agudizar el clima de inseguridad y terror. Lima llega a ser declarada zona de emergencia, suspendiéndose los derechos constitucionales de los pobladores, en una espiral de violencia y muerte que llega a inicios de la década de 1990, a abarcar a todos los sectores de la ciudad, de los asentamientos humanos hasta los distritos residenciales de Lima. El clima de terror e inseguridad se instalan en la ciudad capital hasta que en 1992 es capturado su líder máximo y la situación varía radicalmente.

1.5.1. Antecedentes y contexto regional

Los procesos de urbanización y modernización de Lima Metropolitana se explican en relación a los cambios demográficos que experimentó el país desde mediados del siglo veinte, los cuales generaron nuevos contingentes poblacionales convertidos en actores sociales sobre todo en el lapso del primer gobierno de Belaunde (1963-1968) y del régimen militar (1968-1980), reconfigurando la fisonomía de la capital y desbordando la capacidad estatal, con formas organizativas inéditas.

1.5.1.1. Cambios sociodemográficos en la ciudad

En 1993 más del 50% de la población total del país ya era predominantemente urbana, y Lima Metropolitana concentraba casi la tercera parte de esta población:, 28.4% frente al 9.4% de 1940.

Proporción de la Población de Lima Metropolitana respecto a la población total del país			
AÑOS	POBLACIÓN NACIONAL	POBLACIÓN LM	LM RESPECTO AL PAÍS (%)
1940	7'023,111	661,508	9.4
1961	10'420,357	1'901,927	18.3
1972	14'121,564	3'418,452	24.2
1981	17'762,231	4'835,793	27.2
1993	22'639,443	6'434,323	28.4

Fuente: INEI, *Lima Metropolitana, perfil sociodemográfico*, 1996.

En el lapso de medio siglo, la ciudad de Lima creció sostenidamente hasta albergar alrededor de 6.5 millones en 1993. De acuerdo al Censo de 1993, el 38.8% de la población total metropolitana era de origen migrante.

En 1961, 22 de cada 100 jóvenes vivían en Lima, mientras que en 1981 la cifra se eleva a 31. En cambio, sólo 27 de cada 100 habitantes de todas las edades residían en esta ciudad. Observamos, igualmente en 1993, que el Cono Este albergaba 46.1% de la población de Lima Metropolitana, seguida por el Cono Sur con 27.3% y el Cono Norte con 26.6%.

Las anteriormente denominadas barriadas (rebautizadas como «pueblos jóvenes» por Belaunde y luego como «asentamientos humanos» por Velasco), han pasado por diferentes procesos de reconocimiento y hacia 1990, cerca de la mitad de los siete millones de habitantes limeños vivía en ellas. Su peso demográfico es significativo: Para el caso de Lima Metropolitana, en 1961 unas 316 mil personas vivían en las barriadas, 17% de la población total. Se calcula que en 1970 un tercio de los entonces 3.5 millones de limeños vivía en asentamientos humanos. Para 1981, casi un tercio de la población limeña vivía en ellos (1.5 millones) y estimados realizados una década después calculan entre 3 y 3.5 millones las personas que viven actualmente en ellos, casi la mitad de la población total de la capital.

Lima Metropolitana 1940 -1993: Evolución de la población en los Pueblos Jóvenes			
AÑOS	LIMA METROPOLITANA	POBLACIÓN DE PPJJ	% LIMA
1956	1'397,000	119,886	8.6
1961	1'845,910	316,829	17.2
1970	2'972,787	761,755	25.5
1981	4'608,010	1'171,800	25.5

1993	6'434,323	3'500,000	35
------	-----------	-----------	----

Fuente: INEI, Lima Metropolitana, perfil sociodemográfico, 1996.

Mientras en 1940 existían en la provincia de Lima 23 distritos, 15 de los cuales conformaban el casco urbano de la ciudad y el resto la periferia, el censo de 1961 registró 7 distritos adicionales, cuatro de ellos producto de la creación de balnearios y tres de la subdivisión de distritos existentes por la presión del crecimiento urbano (Breña, Surquillo y San Martín de Porres). Durante los años setenta Lima conoce su mayor crecimiento periférico, creándose nuevos distritos a partir de la formación de barriadas en los Conos Norte (Comas e Independencia), Sur (Villa María del Triunfo y San Juan de Miraflores) y Este (El Agustino) Así, el censo de 1981 registra ya un total de 39 distritos en Lima Metropolitana, aumentando a 43 para el censo de 1993, producto de la expansión física de la ciudad y la subdivisión de antiguos distritos.

Mientras en 1972 el distrito más poblado era el Cercado de Lima, con 354,294 habitantes, para el censo de 1981 el distrito con mayor población fue San Martín de Porres, con 404,856 habitantes, y para el censo de 1993 el distrito que registra en términos absolutos la mayor cantidad de habitantes es San Juan de Lurigancho, con 591,213 habitantes. Se observa, siguiendo las tasas de crecimiento en el período 1981-1993, que los distritos con tasas negativas de crecimiento son los que se encuentran en el área antigua de la ciudad, en tanto que los distritos que han sido reconocidos en las últimas tres décadas luego de haber tenido altas tasas de crecimiento se han estabilizado alrededor del 5%, aún cuando distritos populares como San Juan de Lurigancho, Ate Vitarte y Pachacamac superan este promedio.

La ciudad cambió radicalmente y terminó por definirse el carácter mayoritariamente cholo del rostro urbano como resultado de la progresiva migración interna que convirtió al Perú en un país completamente distinto en menos de cincuenta años. Esta población inmigrante, conjuntamente con pobladores de tugurios y callejones, es la que organiza invasiones de tierras en las afueras de la capital, construyendo viviendas precarias y luchando por obtener servicios básicos.

Se gestan así múltiples organizaciones al interior de las barriadas, que variarán en su conformación y sus objetivos a lo largo de los años pero serán objetivo central de la actividad subversiva en Lima, donde la combinación de la crisis económica y el colapso de los mecanismos mediadores tradicionales entre Estado y sociedad colocan el telón de fondo sobre el cual el PCP-SL, el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru y las Fuerzas del Orden realizan sus acciones organizativas y operativas en Lima, especialmente después de 1988.

1.5.1.2. Economía y pobreza urbana

La población migrante residente de las barriadas representaba en 1950 el 10% del total de área urbana de la capital, pero en 1980 era ya el 50%. A mediados de los ochenta, el 80% de la

extensión de Lima se hallaba ocupada por barriadas, tugurios y barrios populares, correspondiendo el restante 20% a los barrios residenciales de la clases media y alta. Así, la población de las barriadas, casi nula en 1940, llegaba a 110,000 en 1956 y bordeaba los dos millones en 1987, con una tasa de crecimiento medio anual de aproximadamente 9.8% entre 1956 y 1987. Este crecimiento no fue homogéneo, ni mucho menos planificado, pero se observa que hay un progresivo incremento de la pobreza urbana pues si en 1970 sólo el 37% de los pobres residían en las ciudades, hacia fines de los ochenta más de la mitad de los pobres serían urbanos. Los pobladores, en el esfuerzo por sobrevivir, generaron diversas formas organizacionales para enfrentar colectivamente problemas básicos de alimentación, salud, etc.

En el período de 1972 a 1981 se registra un incremento de la población urbana del 5.2%, pero dicho crecimiento no está acompañado de un crecimiento económico. Los trabajadores asalariados reducen su ingreso de 48% del ingreso nacional en 1963, a 35% en 1989, mientras los empresarios y rentistas aumentan su ingreso de 24% a 44% en el mismo período. La precariedad de las condiciones de vida se agudizan en el período de 1982 a 1993, el derrumbe de la economía llega a reducir a la mitad a la clase obrera industrial, aumentando drásticamente el sector informal de 31% en 1983 a 42.2% en 1990.

Evolución de la PEA Total e Informal en Lima			
Metropolitana: 1980-1990 (en %)			
SECTORES	1983	1986	1990
Sector Formal	54.0	49.3	45.4
Sector Informal	31.0	39.5	42.2
Trabajador del hogar	6.0	5.8	4.6
Desempleados	9.0	5.3	7.6

Fuente: Joseph (2001:54).

Si bien existe relación entre el cambio demográfico y la expansión de la informalización de la economía, podemos observar que las desigualdades en la distribución del ingreso no sufren mayor variación, al punto que el ingreso per cápita creció poco más de 1% anual entre 1890 y 1975, a nivel nacional. En este lapso de tiempo se produce el afianzamiento del protagonismo del Estado en las políticas de desarrollo e integración social, que alcanza su mayor expresión durante el gobierno militar de Velasco y el gobierno populista de Alan García.

Como dijimos, la migración interna dio inicio a la formación de barriadas precarias alrededor de la ciudad, proceso que se remonta a la invasión del cerro San Cosme en 1946, seguida meses más tarde por la de San Pedro y el año siguiente por la de El Agustino, a pesar de una fuerte represión estatal que finalmente se convertiría en una ambigua tolerancia, como en los casos de Ciudad de Dios y La Libertad en los 50's (posteriores Conos norte y sur, respectivamente), que en

los setentas representarían el 47.2% de la población de las barriadas con 316,204 habitantes. A la vez, a lo largo de la Carretera Central y cubriendo parte de los distritos de Lurigancho y Ate Vitarte, se desarrolla alrededor de antiguas fábricas textiles la tercera zona industrial de Lima, constituyendo de esta manera un nuevo polo de atracción para la población obrera.

1.5.1.3. Organizaciones barriales y políticas en la ciudad

Para entender el papel que representaban los denominados «cinturones de miseria» para los planes subversivos, hay que considerar además que, a partir de 1981, los municipios asumen todo lo relacionado con los asentamientos humanos, y con su integración a la dinámica distrital, otorgando a los gobiernos locales una importancia política sin precedentes.

Así, los nuevos estratos poblacionales adquieren importancia en tanto población electoral, lo cual se evidencia comparando los registros electorales entre 1963 y 1985.

Lima 1963 – 1985: Población electoral de los distritos más pobres en relación a Lima (%)						
AÑO	1963	1978	1980	1983	1983	1985
%	8.5	22.0	27.82	27.82	29.52	43.44

Fuente: Tuesta (1989:22)

En 1983, año en que se realizaron las últimas elecciones con el viejo registro de 1962, los distritos de Cercado, La Victoria, San Martín de Porres, Rímac, Breña y Miraflores representaban la mitad del electorado limeño. En 1984, el desplazamiento del electorado hacia las zonas más pobres se hace evidente, al punto que la población electoral se duplica en los casos de Ate, Carabayllo, Comas, San Martín de Porres, etc. por lo cual los distritos populares no solo son social y demográficamente importantes, sino que adquieren una importancia política y electoral que sirvió de base de apoyo importante a la izquierda peruana que participó en las elecciones entre 1978 y 1986.

En el ciclo de violencia iniciado en 1980 en los doce distritos limeños con población de menores ingresos, la izquierda y el partido aprista, alternativamente, consiguen el mayor porcentaje electoral. El desarrollo de esta tendencia será el telón de fondo de la estrategia subversiva de los ochenta en la ciudad de Lima, por lo que conviene precisar los escenarios que surgen en la capital, a partir de su evolución como «barriadas» y «nuevos distritos», y el papel que llegan a representar en la estrategia político militar de los diferentes actores presentes en la capital, en el contexto de la agudización de la crisis económica de los ochenta.

Los diferentes gobiernos que se suceden desde 1948 hasta 1968, se mostraron incapaces de resolver los problemas de vivienda, de atención de servicios, de generación de empleo, motivando

las crecientes movilizaciones populares en un nuevo espacio de lucha política. En el contexto del gobierno militar, las movilizaciones tienden a generalizarse. Un buen ejemplo data de marzo de 1976 cuando los pobladores de Ate-Vitarte se movilizan en apoyo a los trabajadores de la Fábrica FAM; o la marcha de los pobladores de Villa El Salvador hacia el centro de Lima, solicitando el nombramiento de profesores. Podemos agregar otros ejemplos como las movilizaciones contra el SINAMOS y las municipalidades en Independencia y Collique, o las protestas contra las empresas que prestaban servicios de agua, luz y saneamiento en Comas y el Cono Sur; o contra los proyectos de remodelación del Ministerio de Vivienda en El Agustino, el Callao y San Martín de Porres, etc.

En estos años las movilizaciones articulaban los intereses de los pobladores de barriadas con las reivindicaciones del movimiento obrero, frente a cuyas movilizaciones el gobierno decreta el Estado de Emergencia en la capital, mientras a lo largo de 1976 se producen nueve ocupaciones de terrenos en el área metropolitana. El Paro Nacional del 19 de julio de 1977 demostró la unidad entre el movimiento obrero y barrial, con participaciones intensas aunque espontáneas de los pobladores (se estima que el 43% de los pobladores de barriadas eran obreros). El paro del 22 y 23 de mayo de 1978 demostró también la fuerza e importancia del movimiento barrial, con una participación mucha más organizada que en 1977, convirtiéndose las zonas norte, sur y este de Lima en campos de batalla, cristalizándose luego esta participación en el apoyo mayoritario que obtienen las listas de izquierda en las elecciones para la Constituyente y posteriormente las elecciones municipales. En 1978 se organizan los Comités de Coordinación y Lucha barrial, que luego constituyen la Confederación Nacional de Pueblos Jóvenes y urbanizaciones populares del Perú, bajo la iniciativa del PC Unidad. En este contexto, el Estado transfería los problemas de las barriadas a las municipalidades, mientras los pobladores de las barriadas apoyaban activamente la huelga de los maestros del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación Peruana (SUTEP).

Sin embargo, tras el fracaso del paro convocado en enero de 1979, la crisis económica genera una desmovilización que es aprovechada por el gobierno para establecer una nueva política estatal, a través del DL N° 22612 del 25 de julio de 1979. Los meses siguientes serán escenario de la conformación de la Central General de Pobladores del Perú, así como una progresiva centralización del movimiento de pobladores, siendo objeto de violentas represiones, con una violencia que se agudiza en los ochenta, como durante la invasión de Huaycán el 15 de julio de 1984.

A nivel de organización popular, si bien las organizaciones surgidas en los cincuenta en torno a las necesidades alimentarias tenían un carácter asistencial bajo la modalidad de entrega de víveres por trabajo individual, con el auspicio de diversas iglesias, es a fines de los setenta y comienzos de los ochenta que, en base la experiencia femenina en la lucha por los servicios urbanos y el apoyo a las huelgas del magisterio, surgen los primeros comedores autogestionarios, en Comas, el Agustino, Villa el Salvador. Las organizaciones de mujeres se convertirán en los

ochenta en actores protagónicos en cuanto a cobertura y capacidad organizativa, con una autonomía que les permitiría participar en la política local.

En este escenario de alta politización y evidente reproducción de la pobreza, el PCP-SL define su accionar en la ciudad como complemento necesario de la guerra popular. La estrategia final del PCP-SL en las ciudades se proponía la conformación del Frente Revolucionario Democrático Popular (FRDP), que aglutinaba a los diferentes organismos generados y era el centro de resistencia y eje del Movimiento Revolucionario Democrático Popular (MRDP), que debía crearse en el campo.

Para comprender esta estrategia es preciso reconstruir los antecedentes del período de violencia política en tres aspectos centrales:

- a. Radicalismo en los distritos limeños antes de los ochenta
- b. Disputas al interior y alrededor de los movimientos populares
- c. Importancia de Lima Metropolitana para el PCP-SL y el MRTA.

1.5.1.1.3.1. Radicalismo en los distritos limeños antes de los ochenta

Tras la escisión de Bandera Roja en 1967, la facción roja del «Comité regional José Carlos Mariátegui» (CRJCM), liderada por Abimael Guzmán, realiza una serie de actividades y sesiones plenarios en Lima. En 1973, el Frente de Estudiantes Revolucionarios (FER) de Huamanga (integrante del CRJCM), imprime una serie de volantes que circulaban clandestinamente en las universidades de Huamanga y de Lima, en cuya portada aparecía el perfil de Mariátegui, seguido por el lema: «Por el Sendero Luminoso de Mariátegui» (Ver estudio de N. Manrique- CVR sobre el PCP-SL).

En su historiografía oficial partidaria, el PCP-SL reconoce que los años 1970 y 1971 fueron los más difíciles para el Comité Regional de Ayacucho, debido a la persecución policial y al «aislamiento con las masas». En 1973 aparecen el Centro de Trabajadores Intelectuales Mariateguistas (CTIM), el Comité Femenino Popular (CFP), que pasa a llamarse Movimiento Femenino Popular (MFP), y el Centro de Auto educación Obrera (CAO), este último encargado de difundir en Lima los principios del sindicalismo clasista entre los trabajadores de diversas ramas de la industria, extendiendo sus redes al trabajo con los mineros de La Oroya. La lucha por el partido había concluido y se trataba de reforzar el trabajo con los frentes sindicales, campesinos, secundarios, intelectuales y femeninos. Para ello, en 1974 el PCP-SL se plantea «retomar el camino de Mariátegui», dando inicio al IV Pleno del Comité Central, coincidente con los aniversarios del nacimiento de Mariátegui y de la revolución china de Mao Tse Tung. En junio del 75 empieza la reconstitución del partido, incorporándose nueva militancia y replanteándose el desarrollo de la guerra popular en la ciudad.

Mientras algunos proponían trabajar con el movimiento sindicalista, otros pedían centrarse en el trabajo con las barriadas. Cuando aparece esta contradicción dentro del Comité Regional, Guzmán opta por realizar la Convención del Comité regional «14 de junio» en Lima, en el distrito de Comas (Urbanización San Agustín), reunión en la cual cambia su seudónimo de «Álvaro» a «Gonzalo». En dicha reunión, Guzmán enfatiza que el trabajo en la ciudad debía adecuarse a la del campo para iniciar la guerra popular, creándose el Comité Metropolitano (conocido como «Metro») en Lima, con el objetivo de convertir la capital en centro de expansión, caja de resonancia del Partido y base de toda organización a nivel nacional. En 1988 el Metro estaría conformado por un total de cinco Comités Zonales (Este, Oeste, Centro, Norte y Sur).

En mayo de 1976, la primera célula obrera del PCP-SL volatea en diferentes distritos de la capital, mientras que en medio de pugnas internas se desarrolla en Lima la XIII Convención del Comité Regional «14 de junio», donde se acordó que el Movimiento Femenino Popular y el Frente de Estudiantes Revolucionarios (FER), así como la primera célula obrera del Centro de Auto educación Obrera, se conviertan en base social para la reconstrucción nacional, con miras hacia la guerra popular. Se empiezan a crear puntos de apoyo para el trabajo zonal y se analiza el papel que iban a cumplir las ciudades en función del campo, tomando como base los barrios, barriadas y como directriz, la clase obrera.

Desde antes de los ochenta hubo una actividad organizativa clandestina del PCP-SL en varias universidades estatales y sindicatos (en especial el SUTEP). Por su parte, el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), surgirá de la unión entre el Partido Socialista Revolucionario Marxista-Leninista (PSR), con el Movimiento de Izquierda Revolucionario-El Militante (MIR-EM), en 1982. En ambos casos, se subestimó la presencia de los grupos radicales en la capital, por considerarlos parte de un movimiento de estudiantes provincianos marginales, desvinculados de las grandes movilizaciones populares y sindicales, o simplemente como grupos radicalizados sin ninguna capacidad de convocatoria mayor. Cabe resaltar que tanto los grupos de izquierda, que optaron por la vía electoral, como las mismas fuerzas del orden, prestaron poca atención a esta actividad clandestina, siendo clara muestra de ello la liberación de Guzmán durante el paro nacional sindicalista de fines de los setentas.

La proliferación de grupos radicales al interior de las universidades entre los años setenta y ochenta fue de la mano con la reducción del gasto público en la educación y la masificación de la demanda universitaria, y con el interés del PCP-SL en captar cuadros tanto de las universidades públicas, especialmente San Marcos, La Cantuta y la UNI, cuanto al interior de las barriadas limeñas.

1.5.1.1.3.2. Disputas al interior y alrededor de los movimientos populares

Entre el surgimiento y el fracaso de las guerrillas del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) en 1965, y el golpe militar de octubre de 1968, la izquierda peruana sufrió un proceso de fragmentación y confrontación alrededor de las llamadas «dos vías»: la vía pacífica (electoral) o la vía violenta (guerrillera) para «hacer la revolución». La diversidad de marxismos y maoísmos existentes al interior de la izquierda nos remite a la existencia de un «campo popular» en oposición al «campo reaccionario». El maoísmo de la nueva izquierda (Vanguardia Revolucionaria o el MIR) era más heterodoxo que el de las agrupaciones vinculadas al tronco del Partido Comunista (Bandera Roja, Patria Roja, y posteriormente el PCP-SL). Ello tenía una manifestación significativa en la composición de sus militancias, sobre todo al interior de las juventudes universitarias pero, por encima de las diferencias, lo que de alguna forma cohesiona la diversidad dentro del campo maoísta radical de los setenta es el peso que adquieren los fundamentos ideológicos en la percepción de la realidad nacional y mundial, así como el papel que les correspondía a las vanguardias en la transformación revolucionaria de la sociedad.

Sin embargo, las disputas internas y los sectarismos e interpretaciones dogmáticas de la realidad y de los textos marxistas-leninistas terminaron por fraccionar aún más a la izquierda, proceso que culmina en las elecciones de los ochenta, con la polarización entre opciones radicales como el PCP-SL y el MRTA, y posiciones ambiguas al interior de los partidos de izquierda.

Como se ha mencionado recurrentemente, el «Pensamiento Guía» elaborado por Guzmán redefinió la teoría maoísta de la guerra popular, planteando la tesis unitaria de cercar las ciudades desde el campo y de generar bases de apoyo revolucionarias en campo y ciudad, que serían la expresión del Nuevo Poder, y apoyo necesario del Ejército Guerrillero Popular en el cerco de la ciudad.

1.5.1.1.3.3. Importancia de Lima Metropolitana para el PCP-SL y el MRTA

El papel de las ciudades en el desarrollo de la lucha armada constituye uno de los ejes centrales de la estrategia subversiva para el objetivo final de implantar el comunismo en el país. El programa senderista, en ese sentido, contenía una serie de etapas y una serie de pequeñas revoluciones culturales. La cuestión de «las cuatro c» (camino de cercar las ciudades desde el campo) estuvo presente desde el inicio de los debates interinos del PCP-SL sobre el desarrollo de la guerra popular en el Perú.

El análisis de los documentos senderistas incautados en las intervenciones policiales efectuadas entre 1990 y 1993 por la DINCOTE revela, según Benedicto Jiménez, uno de los fundadores del Grupo Especial de Inteligencia que logró esas incautaciones, que la tarea de construir «Bases de Apoyo Revolucionarias» era central para sostener el carácter prolongado de la guerra. Todo el problema de la Guerra Popular para el PCP-SL, desde el inicio de sus acciones armadas, consistía en construir, defender y desarrollar Bases de Apoyo Revolucionarias, punto

inicial de la estrategia de las cuatro «c», y objetivo fundamental de todos los planes militares y políticos del PCP- SL.

En abril de 1980 el Comité Central del PCP-SL lleva a cabo la primera Escuela Militar en Jicamarca, Chaclacayo, dirigida personalmente por Abimael Guzmán. Allí se decide iniciar la lucha armada a nivel nacional. En la clausura de esta Escuela Militar Guzmán pronuncia el discurso «Somos los iniciadores», y todos los participantes colocan sus seudónimos en la parte inferior de una bandera roja con la hoz y el martillo, en cuyo extremo anotaron: «Iniciadores ILA 80. Desarrollar la militarización del partido y llevar a cabo el boicot de las próximas elecciones de mayo de 1980».

Como es sabido, en vísperas de las elecciones presidenciales el PCP-SL irrumpe en Chuschi, en Cangallo, Ayacucho, asaltando la oficina del registro electoral, hecho que culminó con la captura de cuatro sospechosos, y fue apenas mencionado por la prensa ayacuchana y nacional. Dos semanas después, empezó una reunión del «Buró Político Ampliado» en Lima, con el objeto de hacer un balance de las acciones realizadas y preparar la guerra de guerrillas. La reunión terminó el 5 de junio, e inmediatamente se ocurrió el intento de incendio de la municipalidad de San Martín de Porras, de parte del Movimiento de Obreros y Trabajadores Clasistas (MOTC), organismo creado por el PCP-SL en 1976.

Cabe recordar, además, que en la reunión del Comité Central Ampliado realizada del 8 al 24 de agosto de 1980, Guzmán fue acusado de desviarse del maoísmo, y su propuesta de trasladar el escenario de la guerra del campo a la ciudad fue calificada de «hoxhista» (Gorriti 1991, Jiménez 2001, Tapia 1997). La acusación era crucialmente desfavorable al liderazgo de Guzmán, (aún no se hablaba del «Pensamiento Gonzalo» como guía de la revolución), por lo que éste se defendió señalando que la distribución en cantidad y calidad de los atentados no potenciaba a la ciudad a expensas del campo, sino que los medios de comunicación le daban mayor repercusión a los atentados en la ciudad. Sus acusadores, según Guzmán, se basaban en la propaganda burguesa y no en el análisis marxista, por lo que culmina su defensa apelando a la especificidad de la lucha armada en el Perú:

La guerra popular se aplica universalmente, según el carácter de la revolución, y se especifica en cada país, de otra manera no puede hacerse. En nuestro caso, las particularidades son muy claras. Es una lucha que se libra en el campo y en la ciudad, así fue establecido ya el año 68, en el esquema para la guerra popular. Allí ya tenemos una diferencia, una particularidad, es en campo y en ciudad. Creemos que tiene que ver con específicas situaciones nuestras. América Latina por ejemplo, tiene ciudades proporcionalmente más grandes que las que tienen otros continentes. Es una realidad de América Latina que no se puede desconocer, basta ver la capital del Perú que tiene un alto porcentaje poblacional. (Entrevista del Siglo)

Al factor demográfico, Guzmán añade significativamente un factor estratégico:

Pensamos que nuestra acción en las ciudades es indispensable y tiene que impulsarse cada vez más y más porque ahí está concentrado el proletariado y no podemos dejarlo en manos del revisionismo ni del oportunismo. En las ciudades existen las barriadas, las inmensas masas barriales. Nosotros, desde el año 76 tenemos una directriz para el trabajo en las ciudades. Tomar barrios y barriadas como bases y proletariado como dirigente, esa es nuestra directiva y la seguiremos practicando, ahora, en condiciones de fuerza popular... a qué masas apuntamos claramente se ve. De lo antes dicho se deriva nítidamente que las inmensas masas de barrios y barriadas son como cinturones de hierro que van a encerrar al enemigo y que retienen a las fuerzas reaccionarias.

La estrategia está definida y «es una especificación de la guerra popular en el Perú hacer del campo el teatro principal de las acciones y de las ciudades complemento necesario», argumento que se consolidaría en el documento «Bases de discusión», presentado en la Sesión preparatoria del Primer Congreso del PCP-SL (enero de 1988) donde por primera vez se habla del «Pensamiento Gonzalo». Posteriormente, y siendo ya hegemónico el «pensamiento Gonzalo», la línea militar del PCP-SL se especifica como guerra popular unitaria, donde el desarrollo de la guerra popular implicaba seguir el camino de cercar las ciudades desde el campo, contando con bases de apoyo revolucionarias, que eran expresión del nuevo poder y servían de apoyo al Ejército Guerrillero Popular, en un momento en el que, según la prédica del pensamiento guía, se daban las condiciones objetivas para realizar tales planes. El objetivo, en pocas palabras, era pasar de la defensa y el equilibrio estratégico, a la ofensiva estratégica y la captura del poder.

Un año después de haber tomado la decisión de iniciar la guerra, durante la IV Sesión Plenaria del Comité Central, se planifica la creación de los comités populares como «embriones del nuevo poder», potenciando al Comité Metropolitano para que actúe en la capital como «caja de resonancia». A partir de 1987 se concretizaría el Plan Piloto del Movimiento Revolucionario de Defensa del Pueblo (MRDP), con vías a la construcción de bases de apoyo revolucionarias, así como para la organización de paros armados en la ciudad. El MRDP es un organismo del cual Socorro Popular será el elemento principal. Socorro Popular se convertiría en aparato central del PCP-SL en 1987, militarizándose y desplazando en importancia al «Metro», en cuanto a calidad y cantidad de atentados en Lima.

En resumen, la estrategia del PCP-SL perfilará tres objetivos centrales: cercar a Lima desde los cinturones de hierro, utilizar la ciudad como caja de resonancia y generalizar el terror en todo el ámbito urbano.

1.5.2. Zonificación de la violencia

Presentamos a continuación la zonificación propuesta para entender los diferentes escenarios que se constituyen en Lima Metropolitana, de acuerdo a los Planes Militares de los grupos subversivos y el accionar de las Fuerzas del Orden que operaban en la capital.

1.5.2.1. Zona I: Este

Los distritos de El Agustino, Ate Vitarte, Lurigancho, Santa Anita, Cieneguilla, Chaclacayo y Chosica conforman la zona Este, siendo el principal eje articulador la carretera central, a lo largo de la cual se sitúan numerosas industrias. Los casos emblemáticos de penetración senderista, y de las respuestas del estado son Huaycán y Raucana, que han merecido estudios en profundidad de la CVR (Ver Estudios de la CVR sobre Huaycan y Raucana).

1.5.2.2. Zona II: San Juan de Lurigancho

Esta zona corresponde al distrito de San Juan de Lurigancho, entre el río Rímac y la cuenca del Chillón. Se trata del distrito de mayor concentración y crecimiento demográfico en el ámbito de Lima Metropolitana, al interior del cual podemos distinguir tres sub-zonas donde el conflicto armado interno tuvo mayor incidencia:

Zona Alta: Asentamientos Humanos Enrique Montenegro, Cruz de Motupe, José Carlos Mariátegui y asentamientos humanos como Esmeralda de los Andes N. 2 (Huanta 2), y en la zona intermedia Esmeralda de los Andes N. 1 (Huanta 1) formados por migrantes que viene de la zona de emergencia ayacuchana..

Zona Intermedia: Incluye Bayóvar, Huáscar, Proyectos Especiales, Arriba Perú y otros barrios.

Zona Baja: compuesta por las urbanizaciones de Tres Compuertas, Caja de Agua, Chacarilla de Otero, Las Flores, Zarate, San Hilarión, Santa Elizabeth.

1.5.2.3. Zona III: Norte

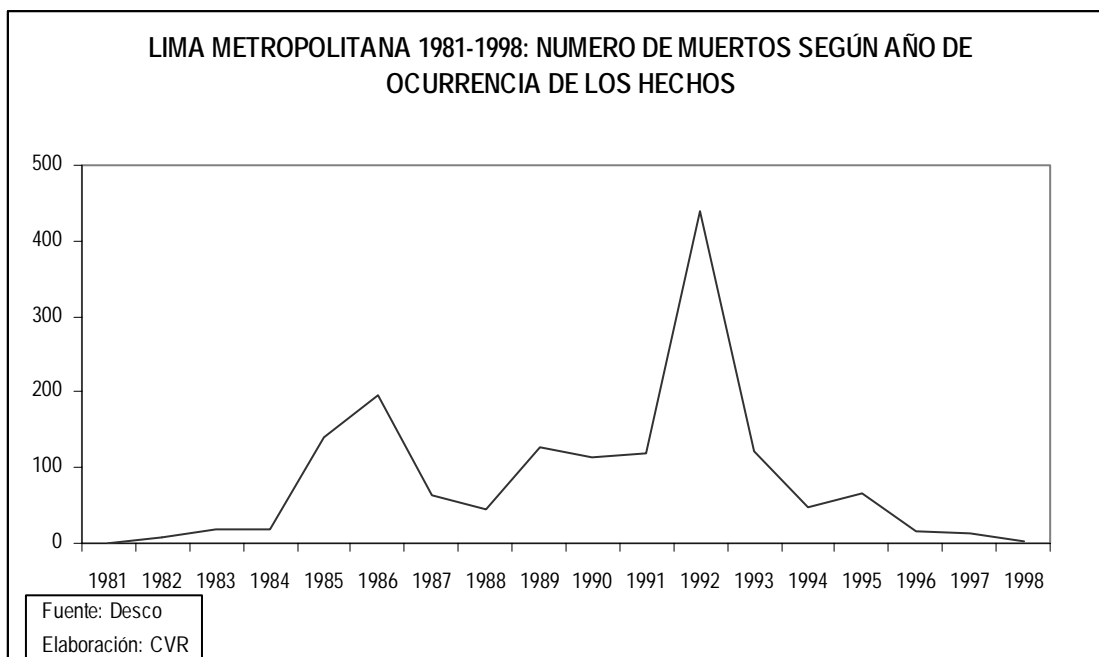
Las barriadas del Cono Norte conforman zonas de fuerte y antigua presencia de los distintos partidos de izquierda. Durante los años de la violencia se encontraban allí casi todos los grupos de izquierda que manifestaban un discurso violentista, sin que sea perceptible la hegemonía de alguno de ellos.

1.5.2.4. Zona IV: Villa El Salvador

Los distritos del cono sur son principalmente Villa El Salvador, Villa María del Triunfo, San Juan de Miraflores, Lurín, Pachacamac y parte de Chorrillos (Ver Estudio de Jo Marie Burt sobre VES)

1.5.2.5. Zona V: Centro

Esta zona está integrada por los antiguos barrios del Cercado, La Victoria, Rímac, Callao, Miraflores y San Isidro. Aquí concentraron el PCP-SL y el MRTA sus acciones de sabotaje y atentados contra entidades públicas y privadas en su objetivo de sabotear el funcionamiento estatal. En efecto, en 1991 entre el 60 y 70% de los atentados en Lima Metropolitana se sucedieron en estos distritos, convertidos en el blanco central de la estrategia de «caja de resonancia».



1.5.3. Periodización

1.5.3.1. La decisión de iniciar la guerra: 1980 -1984

Esta etapa se inicia el 13 de junio de 1980 cuando un grupo de aproximadamente 60 jóvenes pertenecientes al MOTC (Movimiento de Obreros y Trabajadores Clasistas) arrojan bombas molotov en las instalaciones de la Municipalidad de San Martín de Porres. Se presume que el PCP-SL inicia sus acciones armadas en la ciudad bajo el nombre de MOTC para dar la apariencia de un movimiento popular más amplio y masivo. Meses más tarde, el 26 de diciembre, varios perros amanecieron colgados de postes de alumbrado eléctrico en el centro de Lima. Los animales tenían un envoltorio por fuera que decía: «Teng Hsiao-Ping, hijo de perra». Los símbolos que este mensaje esotérico suponía formarían pronto parte del imaginario limeño. Este período se caracteriza por los sabotajes y atentados a las instituciones del estado (ministerios, oficinas estatales) y apagones en toda la ciudad. En esta etapa, el PCP-SL supo aprovechar la estructura centralizada del país, comprendiendo muy bien que Lima serviría como caja de resonancia de sus acciones lo que le permitía una repercusión nacional e internacional que muchas veces no obtenían con su trabajo en el campo. Además, empiezan a consolidarse los núcleos de apoyo en las

universidades (San Marcos y La Cantuta principalmente), constatándose la influencia del PCP-SL (débil aún) en algunos sindicatos de la carretera central y en contadas dirigencias de barrios periféricos de la ciudad.

1.5.3.2. La transición hacia el cerco de la ciudad: 1985 – 1988

Este es un período clave, que llamamos de transición, pues comienza a configurarse el viraje posterior de las acciones del PCP- SL en la ciudad, a través de diversos documentos y volantes que definen a la ciudad de Lima como espacio «complemento» necesario en la estrategia de guerra popular. Precisamente en ese contexto es que puede entenderse los intentos de copamiento en Huaycán y Raucana, o en los sindicatos obreros de la carretera central por ejemplo

Asimismo, cambia el tipo de atentados y sabotajes, empezando los asesinatos selectivos contra dirigentes políticos, autoridades civiles y los paros armados. El PCP-SL durante este período refuerza sus actividades en las otras provincias de Lima pues bajan las acciones en Lima metropolitana y aumentan las acciones en Lima provincias. En esta etapa el PCP-SL desarrolla una batalla por copar las dirigencias barriales, sindicales y universitarias.

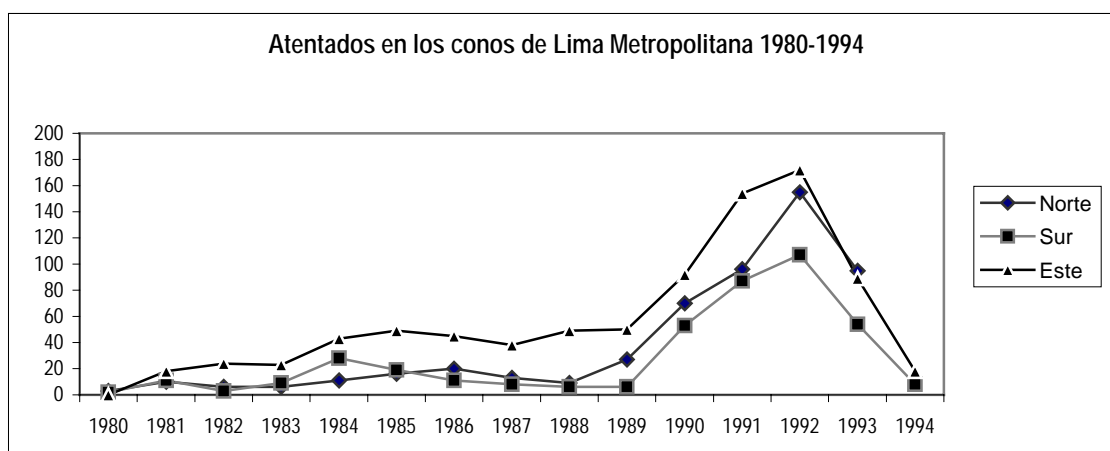
Otros hechos claves de esta etapa son la aparición del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), la matanza de los penales en el Frontón en 1986, y la organización de las primeras rondas urbanas, similares en objetivo a los comités de autodefensa campesinos del sur del país.

1.5.3.3. Todos los actores, la mayor resonancia posible: 1989 –1992

Esta nueva etapa supone para el PCP-SL disputar y capturar el país tanto en términos militares como políticos, multiplicando las acciones en los conos periféricos (cinturones de miseria), así como los asesinatos selectivos a dirigentes barriales que se oponían a la infiltración y copamiento senderista. Asimismo, es el período con la mayor proporción de paros armados, y es también la época de consolidación de Huaycán, y en especial Raucana, prueba piloto de base de apoyo senderista en la ciudad.

Lima Metropolitana pasa de ser un complemento del teatro de operaciones y mera caja de resonancia a ser el teatro principal de las acciones armadas de acuerdo a las directrices del equilibrio estratégico. Se incrementan las emboscadas a patrullas policiales y ataques violentos a comisarías y otros, como el coche bomba en la calle Tarata, al cuartel de Barbones, a la embajada de EEUU, etc. El MRTA propicia igualmente atentados selectivos y pone énfasis en el decomiso de camiones con víveres que son repartidos a la población. A diferencia del PCP-SL, el MRTA

mantiene su interés por las organizaciones barriales y gremiales legales, en la cuales realiza también trabajo proselitista.



Fuente: DESCO

Elaboración: CVR

En 1989 el gobierno aprista dispuso que las Fuerzas Armadas se encarguen del orden interno en Lima y Callao, en el marco de estado de emergencia. Asimismo, en este período ocurre, en julio de 1992, la matanza de estudiantes de la universidad La Cantuta, así como el asesinato contra supuestos militantes senderistas en una pollada en Barrios Altos. Estas y otras acciones son perpetradas por el grupo paramilitar Colina. Este período culmina con la captura, en setiembre de 1992, de Abimael Guzmán.

1.5.3.4. El final de la violencia: 1993 - 2000

Con la captura de Guzmán las acciones del PCP-SL no cesaron, pero paulatinamente fueron decreciendo los atentados en la ciudad. Este periodo se enmarca en el contexto de consolidación del régimen de Fujimori que ganó credibilidad en los sectores populares de Lima. Las cartas de Guzmán por un Acuerdo de Paz, la captura de los principales dirigentes nacionales del PCP-SL y el MRTA, el viraje de la estrategia contra subversiva de las FFAA hacia acciones de inteligencia y asesinatos selectivos tipo Colina, además de la legislación antiterrorista, hicieron que se despejara la certidumbre en la opinión pública que el PCP-SL iba ganando la partida. Este período de decrecimiento de acciones armadas se interrumpe abruptamente con la toma de la residencia del embajador japonés de parte de un comando del MRTA, último registro mayor de actividades subversivas.

1.5.4. Cronología Lima Metropolitana

13/06/1980	Incendian municipalidad de San Martín de Porres con bombas molotov, y arrojan volantes con lemas al PCP-SL como una organización política que ha sido reconstituida y ha dado inicio a la lucha armada. Manifestantes del Movimiento de Obreros y Trabajadores Clasistas (MOTC) vinculado al PCP- SL.
14/12/1980	Atentados en 7 lugares de Lima, dinamitan embajadas y 4 agencias bancarias.
26/12/1980	Aparecen perros colgados en postes del centro de Lima, llevan carteles con la inscripción Teng Siao Ping.
5/01/1981	Primer asesinato de un policía por el PCP-SL: matan al GC Rigoberto Trigozo Daza que custodiaba la casa del Ministro de Guerra / PCP-SL.
04/05/1981	Una decena de actos terroristas se registran en la madrugada en Lima, entre las 2.30 y 4 AM., causando daños materiales a propiedades del Estado y del sector privado. El más importante fue el de la voladura de una torre de alta tensión en La Tablada de Lurín que afectó el suministro de fluido eléctrico a las barriadas y poblaciones del Cono Sur.
01/08/1981	Dinamitan 4 locales AP, 3 de San Martín y Barrios Altos, 3 Juzgados de Paz y Oficina ESAL de Villa el Salvador.
31/08/1981	En la madrugada, seis atentados terroristas se producen en distintos puntos de Lima, que aparecen a todas luces como productos de un mismo plan u operativo rigurosamente planificado.
08/09/1981	En Lima se producen diez nuevos petardazos. Afectan nueve fábricas (Fábrica de Mármoles, «501», Celanese Peruana, National, Hartinger, Textil La Unión, Trébol, Bata) y el monumento en memoria del GC Patiño, que cayó en las luchas guerrilleras de Púcuta.
24/11/1981	En marcha nocturna, una turba de más de 50 personas arroja 20 bombas molotov a los gritos de «la guerrilla es el camino», destruyendo lunas de dos bancos en pleno centro de Miraflores. Una hora más tarde se produce un apagón total en toda la ciudad, debido a voladura de torre de alta tensión que transmite energía eléctrica de la Central del Mantaro a Lima.
29/03 /1982	Apagón total en Lima por espacio de dos horas.
05/07 /1982	Atacan puesto de GC en Ñaña. Mueren dos guardias y dos senderistas.
02/08/1982	Voladura de 5 torres de alta tensión provoca apagón general en Lima y Callao. Saquean Mercado Central y Polvos Azules. Atentan contra local de la Cancillería, Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de Industria y Turismo, y Palacio de Justicia.
19/08/1982	Apagón y atentados en diversos puntos de la ciudad. Un atacante muere por quemaduras. Al día siguiente se declara Lima y Callao en Estado de Emergencia.
26/12/1982	Presidente Belaunde lanza ultimátum a senderistas. El PCP-SL responde al día siguiente mediante un comunicado formal hecho llegar al enviado de El Diario. Indican que « a más represión, habrá más acciones guerrilleras».
07/02/1983	Un grupo de 15 personas armadas atacan almacenes de tienda Monterrey. Muere a balazos el vigilante Tomás Moya y el suboficial PIP Pedro Caballero queda herido.
27/05/1983	Dinamitan 10 torres de alta tensión en Lima. Durante el apagón, dinamitan 3 agencias bancarias, Sedapal, Bayer, local PIP, parque Neptuno, puesto de GC en Tahuantinsuyo. Se produce un incendio de grandes proporciones en Bayer. Iluminan el cerro San Cristóbal
22/01 /1984	En Villa El Salvador, Lima, atacan el puesto de la GC. Es la primera aparición públicamente reivindicada del Comando Armado del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA).
24/04/1984	Presuntos terroristas ametrallan el vehículo del presidente del JNE, Domingo García Rada, dejándolo gravemente herido y causando la posterior muerte de su chofer.
16/05/1984	En el marco del quinto aniversario de la «Lucha Armada» (18 de mayo de 1980),

	elementos del PCP-SL multiplican ataques en Lima y en la zona norte del país. 20 atentados.
16/08/1984	Conferencia de prensa clandestina. MRTA señala que «no realizará acciones militares contra el APRA, mientras éste no ataque al pueblo. Continuar combatiendo a las transnacionales y a las fuerzas represivas. Toman 6 emisoras de radio y MRTA transmite pronunciamiento dado a conocer en Conferencia de Prensa.
04/10/1984	Treinta y dos reclusos del CRAS Lurigancho mueren en incendio, tras represión policial.
07/02/1984	El Gobierno declara Estado de Emergencia por 60 días en Lima y Callao.
10/02/1984	Decretan toque de queda en Lima.
18-19/06/1986	Amotinamientos en el CRAS Lurigancho (124 muertos), debelado por miembros de la Marina y la GR, en el CRAS el Frontón, Callao (150 muertos), y en el CRAS «Santa Bárbara» (3 reclusas muertas).
30/01/1987	Asesinan a César López Silva, dirigente nacional PAP, frente a su domicilio.
13/02/1987	Se produce el allanamiento a 3 universidades buscando terroristas, por parte de fuerzas combinadas de la policía. 793 detenidos y un muerto.
09/04/1987	Un grupo senderista dispara sobre un restaurante cercano al cuartel de la División Blindada en el Rímac, en cebichería «El Piano» del Rímac. Como resultado mueren dos oficiales del Ejército y cinco civiles
29/08/1987	Un grupo de senderistas asesina al presidente de ENCI, Rodrigo Franco (PAP) y a su guardaespaldas en su casa de Chosica. Hieren a su esposa y dos hijos.
01/10/1987	Asesinan a Nelson Pozo Calva, subsecretario de organización del PAP. Subversivos arrojan granadas y matan también a Edilberto Argote.
31/12/1987	Vuelan 30 torres de alta tensión del sistema interconectado del Mantaro. El apagón se sintió en varios departamentos.
11/04 /1988	Asesinan empresario Brancko Pejnovil Baigm, de la fábrica textil Hilados S.A.
01/06/1988	Asesinan a la abogada Carmen Rosa Cusquén en el Hospital Loayza. Una fracción del MRTA la acusa de delatora.
11/06/1988	Detienen en allanamiento a Osmán Morote Barrionuevo, líder del PCP-SL.
07/07/1988	Ocho integrantes de un comando selectivo del MRTA secuestran al Gral. FAP (r) Héctor Jeri García.
28/07/1988	Asesinan abogado Manuel Febres, defensor de Osmán Morote. Comando Rodrigo Franco reivindicó atentado.
19/01/1989	Convocan paro armado en Carretera Central.
13/02/1989	Asesinan Secretario General de Federación Minera, Saúl Cantoral en Canto Grande. Dejan cartel: «Así mueren los soplonos, perro vendido de la huelga minera». También matan a Asistente Social, Consuelo García.
19/04/1989	Fuerzas combinadas del Ejército y la policía allanan las universidades de San Marcos y La Cantuta, detienen a más de 500 estudiantes
27/04/1989	Asesinan diputado IU Eriberto Arroyo Mío en Chaclacayo, después de dejar a sus hijos en el colegio. El PCP-SL, en comunicado de «El Diario», señala que no son autores de este atentado. Los atacantes portaban pistolas con silenciadores. Se presume de grupos paramilitares.
17/05/1989	El PCP-SL asesina al ingeniero Abelardo Ludeña Luque, militante de IU y docente de la UNI.
03/06/1989	Siete soldados del regimiento «Húsares de Junín» resultan muertos, tras un atentado dinamitero ocurrido en Barrios Altos. Como resultado de las intensas acciones policiales y del Ejército, más de quince mil personas son detenidas durante el gigantesco operativo realizado.
20/07/1989	Convocan paro armado «los trabajadores clasistas» de la Carretera Central y la Av. Argentina. Mueren 6 subversivos y cientos de detenidos. Disparan cohetes contra periodistas, toman asentamiento humano. Transportistas no laboran.
04/10 /1989	Secuestran al presidente de canal 5, Héctor Delgado Parker. Matan a su chofer. MRTA.

31/10/1989	Asesinan al dirigente textil y miembro del Comité Central del PUM, Enrique Castilla.
01/11/1989	El PCP-SL marcha por la plaza Manco Cápac. Detonan explosivos. En enfrentamiento con la policía mueren tres personas. 150 detenidos.
03/11/1989	Convocan paro armado en Lima. Atacan vehículos policiales, derriban torre eléctrica e incendian camión. Se colocan varios explosivos. En los atentados mueren 4 subversivos.
9/1/1990	El general (r) del Ejército y ex ministro de Defensa Enrique López Albújar es asesinado por un comando del MRTA en San Isidro.
Marzo 1990	Se forma un grupo especial de inteligencia GEIN al interior de la DIRCOTE con el objetivo explícito de capturar a la dirigencia del PCP-SL.
8/4/1990	Alberto Fujimori gana las elecciones con 62% de los votos.
9/7/1990	Escape de 47 presos del MRTA del penal Castro Castro a través de un túnel, incluyendo a Víctor Polay Campos y Alberto Gálvez Olaechea, dos de sus principales líderes.
Set. 1990	El diputado Gerardo López (Cambio 90) es secuestrado por el MRTA, quienes calificaron el hecho como una «invitación para conversar» y dar a conocer los lineamientos del III Comité Central del MRTA.
16/12/1990	Asesinan al diputado Cambio 90 Alejandro Victoria Mendoza, en Ate Vitarte (Lima).
11/3/1990	Lucero Cumpa, dirigente del MRTA fue recapturada en marzo de 1991 por miembros de la DINCOTE en el distrito limeño de Magdalena del Mar. El 11 de marzo, en una de las acciones más impresionantes y violentas realizadas por un comando del MRTA en Lima, Lucero Cumpa fue rescatada mientras era trasladada al poder judicial junto a la senderista Nelly Evans en una camioneta de la Policía Técnica del Perú. Hubo tres policías asesinados.
15/3/1990	Augusto Zúñiga Paz, abogado de la COMISEDH y patrocinador del desaparecido estudiante Ernesto Castillo Páez fue víctima de un atentado con una carta bomba que le amputó el antebrazo izquierdo.
29/5/1991	La población limeña sale a trabajar normalmente, pese a la convocatoria de paro armado hecha por el PCP-SL a través de su organismo de fachada el Movimiento Revolucionario de Defensa del Pueblo.
1/6/1991	La policía captura en Pueblo Libre a seis emerretistas. El día anterior fue capturado en Jesús María Alberto Gálvez Olaechea, líder del MRTA, junto a Rosa Luz Padilla.
Junio 1991	Con acciones violentas en todo el país culmina el «mes rojo de del PCP-SL» (17 de mayo, aniversario del inicio de su guerra contra el país, al 19 de junio, día de la heroicidad o aniversario de la masacre de los penales).
3/11/1991	En Barrios Altos, Grupo Colina asesina a a 16 personas y otras cuatro son gravemente heridas
25/1/1992	Ex dirigente de Patria Libre, Andrés Sosa. es asesinado por un comando del MRTA
15/2/1992	Es asesinada por el PCP-SL la dirigente de la Federación Popular de Mujeres de Villa el Salvador y teniente alcaldesa del distrito María Elena Moyano.
5/4/1992	El Presidente Constitucional de la República Alberto Fujimori, con el apoyo de las fuerzas del orden, anuncia la disolución del Parlamento Nacional.
Abril 1992	Enfrentamiento en Raucana entre soldados del Ejército y pobladores de filiación senderista. 3 pobladores mueren baleados.
14/4/1992	Peter Cárdenas Schulte, líder del MRTA, es capturado y condenado a cadena perpetua según la ley 25475, aún no promulgada en el momento de su captura. (14 abril).
9/5/1992	Intervención policial denominada «Mudanza Uno» en los pabellones senderistas del penal de Canto Grande con motivo de trasladar a más de 100 mujeres hacia la cárcel de Chorrillos. El 12 mayo, un comunicado oficial del Ministerio del Interior, informa que 35 reclusos acusados por terrorismo resultaron muertos. Hugo Deodato Juárez Cruzatt, integrante del Buró Político del PCP-SL, Yovanka Pardavé Trujillo, Elvia

	Nila Sanabria Pacheco, Tito Valle Travesaño.
12/5/1992	El gobierno publica la Ley de Arrepentimiento.
5/6/1992	Un «camión bomba» hace explosión frente al Canal 2, destruyendo sus instalaciones y matando a tres trabajadores del canal.
9/6/1992	Es recapturado en San Borja el dirigente del MRTA Víctor Polay Campos, «camarada Rolando», procesado y condenado a cadena perpetua.
16/7/1992	La explosión de un coche bomba del PCP-SL en pleno centro de Miraflores, calle Tarata, conmociona al país. Alrededor de 15 muertos.
22-23/7/1992	«Paro armado» del PCP-SL en Lima deja el trágico saldo de 8 muertos, 38 heridos, 5 coches bomba, 13 vehículos de transporte urbano incendiados y 23 artefactos explosivos.
18/7/1992	Una incursión militar en la residencia estudiantil de la Universidad Enrique Guzmán y Valle termina con el secuestro y la desaparición de nueve alumnos y un profesor de dicha universidad.
12/9/1992	El Grupo Especial de Inteligencia (GEIN) de la DINCOTE captura a Abimael Guzmán Reinoso y cúpula dirigencial del PCP-SL, en una residencia de Surquillo.
17/10/1992	Capturan a Martha Huatay Ruiz, responsable de Socorro Popular y miembro del Comité de Lima Metropolitana.
22/11/1992	Elecciones para el CCD. Clara victoria de la lista oficialista Nueva Mayoría - Cambio 90.
18/12/1992	Pedro Huilca, secretario general de la CGTP es asesinado, despertando dudas respecto a sus autores.
24/1/1993	Miembros del MRTA raptan al empresario minero David Vera Ballón. Se trata del primer secuestrado del MRTA que posteriormente es victimado.
17/5/1993	El PCP-SL convoca a un «paro armado» en Lima, desde el lunes 17 al miércoles 19. El paro es acatado por los transportistas.
Julio 1993	En Cieneguilla, se encuentran 4 fosas con restos humanos, gracias a una denuncia hecha al semanario SI. Los restos pertenecen a los nueve estudiantes y un profesor de la Universidad La Cantuta desaparecidos en julio del año pasado.
Nov 1993	División del PCP-SL: Abimael Guzmán plantea el acuerdo de Paz y Feliciano seguir desarrollando la lucha armada (VI Plan Militar).
Dic 1993	Trescientos presos senderistas de Canto Grande adhieren a las cartas de Abimael Guzmán. Esto trajo al debate la división interna del PCP-SL, entre los «acuerdistas» y los seguidores de «Feliciano».
23/3/1995	Es capturada Margie Clavo, importante líder senderista, miembro del Comité Central de Emergencia del PCP-SL.
9/4/1995	Alberto Fujimori gana su reelección presidencial.
Nov 1995	Alberto Andrade es elegido Alcalde de Lima.
30/11/1995	Miguel Rincón Rincón, importante miembro de la cúpula del MRTA, es capturado junto a Lori Berenson, en una residencia en La Molina.
6/3/1996	Pascuala Rosado, dirigente popular y lideresa de Huaycán, es asesinada por tres elementos del PCP-SL, entre ellos una mujer.
17/12/1996	Un comando de 14 miembros del MRTA toma por asalto la residencia del embajador japonés Morihisa Aoki. Al final del año, luego de sucesivas deliberaciones y pronunciamientos todavía quedan 74 rehenes.
22/4/1997	La «crisis de los rehenes» termina con la intervención militar y 17 víctimas: el vocal de la Corte Suprema, Carlos Giusti, dos oficiales del Ejército y los 14 emerretistas que asaltaron la residencia.
13/10/1998	Alberto Andrade es reelegido Alcalde de Lima.
9/4/2000	Elecciones presidenciales dan triunfo turbio a Alberto Fujimori.
26/7/2000	Alejandro Toledo, convoca a una movilización de tres días (26, 27 y 28 de julio), denominada «Marcha de los Cuatro Suyos» en protesta a la fraudulenta re-reelección de Alberto Fujimori.
Oct. 2000	Alberto Fujimori viaja a Asia, desde donde anuncia su renuncia.

1.5.5. Zona I: Este de Lima Metropolitana

Los distritos de Ate Vitarte, Lurigancho (Chosica), El Agustino, Santa Anita, Chaclacayo, se encuentran localizados en las márgenes del río Rímac, siguiendo la dirección de la Carretera Central. En esta zona se ubicaron diversos asentamientos humanos, principalmente por su cercanía con la zona industrial de Ate Vitarte. En efecto, alrededor del eje vial conformado por la Carretera Central, la Autopista Ramiro Prialé y la Avenida Separadora Industrial, se conformó un importante núcleo de población obrera, precisamente el rasgo principal de la Zona Este de Lima metropolitana. Por continuidad espacial, hemos considerado en esta Zona Este también el distrito de Cieneguilla, aunque se encuentra en la cuenca del río Lurín y tiene una PEA principalmente agropecuaria.

1.5.5.1. Datos generales

1.5.5.1.1. Crecimiento demográfico

De los seis distritos que conforman la Zona Este, Ate Vitarte registra la mayor tasa poblacional y en 1993 su población era casi de 300 mil habitantes. Su explosivo crecimiento se explica principalmente por la conformación de un eje industrial a lo largo de la línea del Ferrocarril Central desde los años cuarenta y luego de la carretera Central. En 1956, el 54.3% de la población migrante residía en estos distritos. Ate Vitarte, que en 1940 era predominantemente rural (78%), se convierte en 1961 en principalmente urbano (80%), con una población cuadruplicada (pasó de 10,602 a 41,854 habitantes respectivamente). En los años cincuenta, más de la mitad de su población vivía en barriadas, principalmente El Agustino y San Pedro. A su vez se expandía la manufactura a nivel nacional, mientras grandes y medianas empresas de productos textiles, químicos, de metal mecánica, de tabaco, alimentos, plásticos, ladrilleras y maquinaria eléctrica se asentaron en este distrito.

En 1945, la inauguración del mercado mayorista de La Parada generó una nueva ola de formación de barriadas con la invasión de las laderas del cerro San Cosme en 1946, seguida meses después por las invasiones de San Pedro, y en 1947 con la barriada de El Agustino. En 1965 se creó el distrito de El Agustino, a la vez que aparecían nuevos sectores de barriadas. Destacó en este proceso el distrito de Lurigancho, que en 1967 fue dividido para crear San Juan de Lurigancho.

Las barriadas que se desarrollaron siguiendo la Carretera Central se ubicaron alrededor de antiguas fábricas textiles, constituyendo una importante zona industrial. Un proceso similar, aunque a menor escala, ocurrió en Chaclacayo, creado en 1940 y cuya población aumentó de 1,109 habitantes a 9,363 en 1961.

A diferencia de los otros distritos, Santa Anita, creado en los noventa entre El Agustino y Ate Vitarte, está conformado principalmente por zonas urbanizadas y con una población regular que registraba, de acuerdo al censo de 1993, aproximadamente 120,336 habitantes. Según este censo, Ate Vitarte registró 270,162 habitantes, seguido por El Agustino con 156,204 habitantes y Lurigancho con 101,656 habitantes.

1.5.5.2. Diferenciación distrital

La Zona Este constituyó un lugar privilegiado para los migrantes que buscaban empleos poco calificados, así como un contacto permanente con la Sierra, de donde procedía el 60% de su población. A esto se añadía la importancia de distritos como Ate Vitarte, una de las tres zonas fabriles de Lima donde se concentró gran parte de la población obrera de la capital. Esta situación fue variando con el tiempo. En 1978 se estimaba en 12% la población trabajadora que en Lima dependía del Estado; para 1981 esta cifra se elevó a 27.5%. Sin embargo, el incremento del desempleo a nivel nacional, producto de la crisis económica, generó la aparición de alternativas complementarias de ingresos a nivel informal y de organización comunal alrededor de la subsistencia. A nivel distrital se observa la reducción, entre 1972 y 1981, de la población obrera y asalariada en términos relativos. Distritos como Carabayllo y Cieneguilla, que aparecían con más del 45% de población obrera, disminuyeron su población obrera, mientras aumentó la presencia de pueblos jóvenes. En El Agustino y Ate Vitarte, mientras más del 20% de su PEA en los setenta se ocupaba en el sector industrial, en 1981 pasó a dedicarse mayoritariamente al comercio.

El caso de El Agustino es singular, pues a pesar de que su población se tornó más heterogénea y densa, mantuvo una pobreza sostenida. Es así que la tabla de pobreza utilizada en el gobierno de Alan García se basaba en los datos del censo de 1981, que sindicaban a El Agustino como el segundo distrito más pobre de Lima, sólo superado por Carabayllo. A mediados de los ochenta, El Agustino llegó a tener la mayor concentración de economía informal de Lima (63 %), ubicándose en el séptimo puesto del nivel de pobreza de la ciudad.

Chosica constituía desde el siglo pasado un lugar de residencia de invierno para las clases pudientes de la capital. Con el proceso migratorio y la conformación de barriadas y asentamientos humanos, predominaron en la zona las cooperativas y asociaciones de vivienda. En general, existió una evidente diferenciación económica y cultural al interior de la Zona Este, principalmente con la construcción de un nuevo eje vial con las avenidas Javier Prado y Circunvalación, haciendo que dichos terrenos se valoricen y fuesen adquiridos por sectores medios y altos que se concentraron en la zona oeste de Ate Vitarte, en las urbanizaciones Camacho, Ingenieros, Salamanca y lo que actualmente es el distrito de La Molina, mientras las áreas localizadas en la carretera central se caracterizaron por un mayor crecimiento poblacional y una estrecha relación laboral con el eje

industrial y comercial. Esto repercutió en las orientaciones políticas de este sector de la ciudad durante el proceso de sindicalización de los años 50 a los 70.

1.5.5.3. Contexto local y situación política

En la década de 1970, la industrialización impulsada por el modelo económico de sustitución de importaciones entró en un grave problema de crisis y desorganización, impulsando la protesta sindical. Entre 1968 y 1975 el movimiento obrero estuvo liderado por la izquierda, que en junio de 1976 propició un «Comité de Lucha de la Carretera Central» representativo de los sindicatos de la zona, realizando movilizaciones y un contundente paro de solidaridad con los trabajadores de la fábrica Nylon. Esta acción culminó en un violento enfrentamiento con las fuerzas policiales, el cierre de la carretera central por más de ocho horas y el incremento de las movilizaciones reivindicativas en toda el área Metropolitana. El gobierno decretó el Estado de Emergencia, mientras en Lima se constituyó en mayo de 1977 el «Comité de Coordinación y Lucha Barrial», que articuló el movimiento obrero y barrial en el Paro Nacional del 19 de julio de 1977. En las elecciones del 18 de junio de 1978, la lista de Izquierda Unida obtuvo una alta votación en las barriadas.

Al igual que en otras zonas de la capital, el problema de la vivienda y la dotación de servicios de agua y desagüe generaron la conformación de redes clientelares, que se vieron favorecidas por la irrupción del gobierno aprista. En este contexto, durante la gestión municipal de Alfonso Barrantes, se implementó el «Programa Especial de Habilitación Urbana de la zona de Huaycán», organizándose el 15 de julio la primera invasión. De esta manera, la municipalidad buscaba intervenir frente al problema de la vivienda, con una experiencia de organización urbana sustentada en la participación popular. En los noventa le tocaría el turno a Raucana, el fallido proyecto senderista de «Comité Popular abierto» en la capital.

Comportamiento electoral de los distritos de la zona Este 1978-1998

DISTRITO	1978	1980	1980	1983	1985	1986	1990	1998
Ate	IU	AP	IU	IU	APRA	IU	AP	Somos Perú
El Agustino	IU	AP	IU	IU	APRA	IU	IU	Vamos Vecino
Lurigancho	IU	AP	AP	IU	APRA	APRA	AP	AP
Chaclacayo		AP	AP	IU	APRA	APRA	PPC	Independiente
Cieneguilla		AP	AP	APRA	APRA	APRA	PPC	Vamos Vecino
Santa Anita								Vamos Vecino

Fuente: Tuesta (1989).

En 1980 El Agustino, Lurigancho y Ate Vitarte conformaban el grupo de distritos de mayor marginación y pobreza relativa a nivel de Lima Metropolitana, aunque sus porcentajes eran muy diferenciados, entre el 9.38% (El Agustino) y el 3.34% (Ate Vitarte).

El dinamismo del crecimiento poblacional, así como las disparidades en torno a la distribución del ingreso nacional, generaron una tensión dramática en torno a los nuevos asentamientos humanos, que en Huaycán y Raucana, e incluso en mercados y «paraditas» llegó, a manifestarse en una progresiva presencia senderista en medio del declive del sindicalismo. Por otra parte, el caso de la Cantuta, universidad pública ubicada en Chosica, nos remite al abandono estatal de la educación pública, hasta que en los noventa la política contrasubversiva generó un saldo trágico en la población estudiantil, en medio de la mayor ola de violencia que registraba la capital. Así, confluyeron diversos factores y actores en la Zona Este durante los ochenta y noventa, destacando la modificación de la PEA ocupada, el retroceso de la sindicalización y el aumento de la frustración por desempleo en sectores barriales.

1.5.5.2. Historia del conflicto armado interno

A nivel de sindicatos, el PCP-SL desarrolló un trabajo político muy activo, incluso desde antes del estallido de la violencia. Pero será desde 1987, al afirmar su concepción de «cerco a la ciudad», que el PCP-SL realizará un trabajo político más sistemático con el objetivo de copar dirigencias sindicales, para desarrollar estrategias que buscaban, en un primer momento, sabotear y desestabilizar las organizaciones sindicales, y posteriormente controlar y manipular las demandas reivindicativas, exacerbando los conflictos laborales. La ola de violencia y ajusticiamientos fue creciendo en abierto combate con las dirigencias sindicales y en alianza con los grupos más radicalizados, como los trabajadores estatales. Sin embargo, el PCP-SL no obtuvo mayores logros en el movimiento sindical, aunque sí contribuyó a su desgaste, constituyendo desde fines de los ochenta, tras el fracaso en la toma de COPE, diversos «Comités de Lucha» (CLOTCC, CLAA, etc.) que convocaron una serie de «paros armados».

Por otra parte, la crisis de la Universidad pública se acentuó al iniciar el PCP-SL sus acciones pues las universidades públicas, como La Cantuta, fueron percibidas como «nidos de terroristas». Desde fines de los ochenta y principalmente tras el autogolpe del 5 de abril de 1992, cerca de un centenar de alumnos y docentes de provincias fueron ejecutados y desaparecidos por acción de grupos paramilitares y subversivos. En Lima, el ajusticiamiento de 9 estudiantes y un profesor de la Cantuta tuvo una gran resonancia política, por constituir una prueba fehaciente sobre la responsabilidad de importantes mandos políticos y militares en los hechos violatorios de derechos humanos durante la guerra interna.

1.5.5.2.1. Mecanismos de captación y de legitimación

El 18 de mayo de 1982, un grupo de senderistas iluminó uno de los cerros de El Agustino con la hoz y el martillo. Este acto simbólico, conjuntamente con la voladura de torres de energía eléctrica,

fueron parte de la estrategia senderista en distritos como el Agustino y Chosica, priorizados por el PCP-SL desde el inicio de sus acciones, aun cuando las acciones principales se realizaban en las zonas rurales, principalmente en la región ayacuchana. Por otra parte, en El Agustino se formó una «escuela militar» a cargo de Laura Zambrano, mientras las acciones en Ate Vitarte se concentraron en capturar e influir en espacios como los sindicatos, donde se distinguen dos fases: una primera fase de deslegitimación de las luchas sindicales, tildando a los dirigentes de «revisionistas conciliadores», mientras buscaban captar militantes para que realicen tareas en los aparatos armados, logísticos o de inteligencia, y una segunda fase con una intensa labor de volanteo y presencia de arengas a la salida de las fábricas, combinada con una estrategia de destrucción de la infraestructura fabril, como parte de los acuerdos del I Congreso. Es el caso de Nylon, Rayón, Bata, Nissan, y otras fábricas localizadas en la Carretera Central. Lejos de desarrollar bases, los ataques e incendios de fábricas generaron el rechazo de los trabajadores, que veían mermados sus puestos de trabajo, quebrando incluso las demandas de reposición de los trabajadores de Nissan, y afectando a los trabajadores de Bata, que cerró secciones enteras como producto de los incendios.

El PCP-SL privilegió, además de los sabotajes, la confrontación, incitando a la reacción violenta de las fuerzas policiales en las marchas de huelguistas, a la vez que reforzó su trabajo político con una diversidad de modalidades, desde volanteos, asesinatos de supuestos dirigentes «traidores», copamiento de dirigencias sindicales, y convocatorias a paros armados. Con estas tácticas, las divergencias entre el PCP-SL y los trabajadores organizados se profundizaron, aunque logró captar a los sectores más radicalizados, que propugnaban la huelga general indefinida.

En el Agustino, Ate Vitarte y Chosica, tras el ajuste económico de 1991, se implementaron programas de emergencia, mientras el PCP-SL introducía la noción de «sanción ejemplar» como método de sometimiento de las dirigencias. A su vez, se presentaba como garante del orden en los mercados, obligando al control de precios y ajusticiando delincuentes. En Raucana, el mayor experimento organizativo senderista, los moradores provenían de El Agustino, donde el proselitismo senderista fue bastante temprano, así como de Andahuaylas (el contingente más numeroso), Los Ángeles, Yerbateros, Granja Azul, San Gregorio, Vitarte, Nueva Esperanza y Vista Alegre, además de un importante contingente de provincianos desplazados por la violencia en las zonas rurales, e incluso procedentes de otras zonas de Lima. La situación laboral de la gran mayoría era precaria, y su capacidad de organización muy limitada. Con ellos el PCP-SL constituyó en Raucana un «Comité popular abierto», en corazón de Ate Vitarte.

1.5.5.2.2. La lógica del paro armado

Los «paros armados» del PCP-SL formaban parte de una lógica de amedrentamiento y orquestación de acciones, con el objetivo de provocar el colapso del Estado mediante la generalización de la violencia. Estos paros armados se ubican en la tercera etapa de la violencia en

Lima Metropolitana, aquella vinculada con el desarrollo del «equilibrio estratégico». Se trataba de una acción militar que comprendía todas las otras formas de lucha senderista (agitación y propaganda, sabotajes, aniquilamiento selectivo, combate guerrillero), con un claro objetivo político: «aislar y socavar al viejo Estado mostrando su impotencia». El primer «paro armado» en Lima, con el objetivo de competir con la Izquierda Unida como proyecto político, fue realizado el 19 de enero de 1989, coincidiendo con el I Congreso de IU en Huampaní, en la carretera central. Posteriormente, las zonas priorizadas por el PCP-SL fueron los sectores ocupacionales de la capital, luego la Carretera Central, Chosica y posteriormente Canto Grande.

El paro armado como modalidad subversiva creció en importancia desde que la directiva senderista proclamó la llegada del equilibrio estratégico. Las convocatorias solían coincidir con fechas emblemáticas del PCP-SL, aunque a menudo formaban parte de campañas planificadas, con plataformas reivindicativas muy parecidas a las de las organizaciones barriales y sindicales, excepto por su apoyo a la «guerra popular». El mayor despliegue de estas acciones se desarrolló entre noviembre de 1991 y febrero de 1992, cuando el PCP-SL asesinó en Villa El Salvador a María Elena Moyano por su abierto rechazo a dicha convocatoria. Dos años después, en el paro armado convocado el 17 y 18 de mayo de 1994, el PCP-SL mezcló las amenazas con una actitud de apertura para el diálogo, acercándose a diversos dirigentes barriales de Ate Vitarte incluso con una semana y media de anticipación. El debilitamiento y repliegue senderistas, lejos del nivel alcanzado entre 1989 y 1992, se corresponde entre 1993 y 2000 con el declive definitivo de las acciones armadas en la ciudad.

1.5.5.2.3. Ensayos de organización en los asentamientos humanos

En la Zona Este, los asentamientos humanos más citados por El Diario, vocero del PCP-SL eran la zona «E» de Huaycán, la zona «F» de Horacio Zevallos, así como San Antonio y el Trébol, todos ellos ubicados en la Carretera Central. También se indicaba a los cerros de El Agustino, sobre todo en las partes altas, para oponerlas al proyecto de IU de formar «micro áreas de desarrollo».

El PCP-SL inició su trabajo de infiltración en el AH San Antonio, ubicado cerca de la Municipalidad de Ate Vitarte. Desde allí se fue extendiendo hacia el asentamiento San Gregorio, la asociación de vivienda Ricardo Palma y la cooperativa de viviendas MANILSA, mientras por otro lado logró infiltrarse en la asociación de vivienda Santa Cruz, Nuevo Vitarte, Barbadillo, la Cooperativa de Viviendas Alfa y Omega, el Asentamiento humano Micaela Bastidas I y II, y la Pro Vivienda Los Ángeles. Privilegiando su trabajo de infiltración en los grupos de origen provinciano, los moradores infiltrados llegaban de El Agustino y tenían anteriores vínculos con los comedores populares.

Los estudios de la CVR indican que, a inicios de la década de 1990, la zona en la que se ubicó el Proyecto Huaycán tenía un valor particular para la estrategia senderista de una eventual insurrección, en el contexto de su denominado «equilibrio estratégico».

Huaycán fue inicialmente concebido como un proyecto planificado del Municipio Provincial de Lima, bajo la gestión de Izquierda Unida. El 15 de julio de 1984 se instalaron cerca de 2000 familias, y en agosto ya eran 4000. Desde un inicio, el PCP-SL intentó infiltrarse en Huaycán, como sucedió por ejemplo en julio de 1985, durante el Primer Congreso Ordinario de Pobladores.

Era evidente la oposición del PCP-SL al proyecto autogestionario, y a la vez que incrementaba sus tácticas de confrontación y provocación, buscaba reforzar su trabajo político sobretudo en las zonas altas que concentraban nuevos pobladores, y a través del Comité de Electrificación, con el que llegó a controlar la zona E. En los noventa, a medida que la estrategia contrasubversiva tuvo un giro decisivo en la capital, se instaló en Huaycán una base militar, mientras se incentivaron los programas de asistencia social. En abril de 1991, durante el Segundo Congreso Estatutario de la CUAH, los senderistas fueron derrotados políticamente por los delegados, que acordaron organizarse en «autodefensa de masas» frente a la drogadicción, la delincuencia y la violencia. Como respuesta, el PCP-SL convocó a un paro armado para los días 29 y 30 de abril de 1991, e intentó sabotear las elecciones de mayo, que igual se realizaron con el apoyo mayoritario de la población, y las garantías solicitadas a la Policía Nacional. El 7 de julio la CUAH decidió crear el «Cuerpo de Autodefensa», restringido a combatir la delincuencia y la drogadicción, pero una semana después, durante una ceremonia pública, Fujimori reconoció el organismo agregándole la tarea de combatir la subversión. Esta «nueva responsabilidad» originó el repliegue de la organización, frente al acecho y ataque del PCP-SL contra las rondas urbanas y contra el comité de Autodefensa, que terminaría más tarde con la muerte de la dirigente Pascuala Rosado.

Tras su fracaso político en Huaycán, el PCP-SL parecía dispuesto a copar desde el principio las dirigencias y tener el control total del asentamiento Raucana. El 29 de agosto de 1991, El Diario escribió que el Asentamiento Raucana era uno de sus «Comités Populares abiertos», modelo de enclave que luego pudiera extenderse a toda la metrópoli. Desde su fundación, el 28 de julio de 1990, coincidiendo con el aniversario patrio y con la fecha de cambio de gobierno, y bajo el nombre de Asentamiento Humano «La Estrella», el PCP-SL intentó dirigir los destinos del asentamiento, bautizado finalmente como «Félix Jorge Raucana» en memoria de uno de los pobladores muertos durante el intento de desalojo policial.

Al parecer, el PCP-SL consideraba a este asentamiento como un comité base del Movimiento Clasista Barrial. Por ello la importancia de elaborar desde el comienzo un constante trabajo político, que mezclaba el convencimiento con la coerción. Podemos señalar entonces que el inicio de la incursión del PCP-SL en Raucana empezó con la convocatoria a pobladores

empobrecidos excedentes de otros asentamientos humanos, que son invitados a tomar el terreno ubicado al costado del fundo Barbadillo, con el único requisito para ser aceptado de censarse y tener familia. El PCP-SL comienza a organizar no sólo la defensa vecinal contra los desalojos sino casi todos los aspectos de la vida de la población, desde el problema del agua, las faenas agrarias y los comedores comunales, hasta los aspectos de salud, centralizando el abastecimiento de medicinas mediante un botiquín que controlaba directamente. Para mantener el orden interno, el PCP-SL impuso un severo código de sanciones y castigos que fueron percibidos positivamente por los pobladores.

Esta organización de la vida cotidiana en Raucana duró hasta el 6 de setiembre de 1991, fecha en que el Ejército instaló una base militar que se mantuvo hasta el 2000, militarizando y controlando socialmente la vida cotidiana entre la población, dejando graves secuelas producto de la represión sufrida por los pobladores.

1.5.5.2.4. Sindicatos

Pueden destacarse dos fases en el accionar senderista en relación con los sindicatos, que tienen su quiebre en 1987, año en que el PCP-SL inició su lucha contra la CGTP. En la primera fase, desde 1983, el PCP-SL impulsó la creación, en las ciudades, del Movimiento Revolucionario de Defensa del Pueblo (MRDP), como parte de la labor de «reorganización del partido» en la perspectiva del «Plan de conquistar bases», todo ello en el objetivo del inicio de la lucha armada de 1980. En sus documentos, el PCP-SL señala la importancia de los denominados «Organismos autogenerados» como ligazón entre el partido y las masas, realizando el trabajo de frente en sindicatos, federaciones, asociaciones de comedores populares, barrios y universidades. De otra parte, en el campo sindical, el denominado «Movimiento Obrero de Trabajadores Clasistas» (MOTC) fue el organismo encargado de la captación de trabajadores y del diseño de las acciones. Los primeros «sabotajes a fábricas», entre enero y abril de 1987, fueron reivindicados por El Diario, señalándolos como el inicio de ejecución del «Gran Plan para desarrollar las bases». A este diseño se incorporó el desarrollo de acciones de confrontación directa violenta y de eliminación física de empresarios industriales.

El PCP-SL optaría, en esta segunda fase, por gestar organismos propios como el Comité de Lucha de Obreros y Trabajadores Clasistas de la Carretera Central (CLOTCCC), acordado en abril de 1988 por un centenar de delegados de diversas bases gremiales de la Zona Este que se reunieron en Ñaña. Paralelamente, aparece en la zona una base del MRDP, destacando entre los sindicatos infiltrados por el PCP-SL, en 1989, los de Nylon, FAM, Atlas, COPE, Tabacalera Nacional, Bata, Tejidos La Unión y Pelikán.

Al fracasar la presentación abierta en elecciones sindicales a través del MOTC, el PCP-SL intenta ganar dirigencias en alianza con grupos radicales que propugnaban la huelga general

indefinida, a cuyo objeto se presentaban como independientes «camuflados» en listas sindicales, pero sufren sucesivas derrotas en las elecciones de las fábricas COPE, Motor-Perú e INRESA.

El estilo autoritario y confrontacional del CLOTCC no le permitió ganar bases sindicales significativas; peor aún, fue rechazado por las bases de los sindicatos de Atlas y Tejidos «La Unión». En efecto, el 31 de octubre de 1989, un grupo de senderistas asesinó al dirigente del Sindicato de Trabajadores de la Fábrica de Tejidos «La Unión» en Ate Vitarte, Enrique Castilla Linares. Castilla, miembro del PUM que contaba con el reconocimiento del sector gremial, y que se preparaba para rechazar el paro armado convocado para el 3 de noviembre de ese año

Al hacerse evidentes las intenciones senderistas en el CLOTCC y el CLOCAA, el PCP-SL reapareció a través del MOTC, que en junio de 1991 inició una ola violentista contra Tejidos «La Unión», asesinando a funcionarios de la empresa. Para entonces, los paros armados en las ciudades y centros industriales no hacían más que demostrar la sobre valoración de las fuerzas senderistas, ciegamente impulsadas por la determinación de haber alcanzado el equilibrio estratégico; por ello, aunque el PCP-SL logró liderar, con tácticas de confrontación total, las luchas sindicales de COPE y Pelikan, el resultado fue la liquidación de los sindicatos, poniendo así en evidencia la divergencia total entre los intereses del movimiento sindical y los intereses del PCP-SL en la Zona Este.

1.5.5.2.5. Circuito universitario

Desde las movilizaciones por la gratuidad de la enseñanza en Huanta (1969), se establecieron vínculos entre la UNE y la Universidad de Huamanga, lo cual repercutió en el temprano interés de

El PCP-SL por La Cantuta, a partir de su reapertura en 1980 (Ver Estudio de la CVR sobre universidades públicas). Años después, dentro de los planes y visión estratégica de los subversivos para el Cono Este, la UNE fue concebida como un espacio de reclutamiento y captación de cuadros para articularlos al trabajo político en sindicatos y barriadas en la Carretera Central y zonas aledañas. El control senderista de la Universidad llegó al grado de influenciar en la administración del internado, el comedor y el servicio de transporte, aprovechando la situación de abandono estatal que padecía el sistema universitario. A esta situación se añadía la masificación que experimentaba La Cantuta, con una población estudiantil mayoritariamente procedente de provincias y de escasos recursos económicos, que veía en la universidad una opción de desarrollo personal, con un discurso marcadamente confrontacional.

El trabajo del PCP-SL tuvo fases definidas: Primero buscó obtener militantes a partir de un discurso pedagógico, absorbiendo algunos grupos estudiantiles de la izquierda más radicalizados. Posteriormente, el PCP-SL fue asumiendo posiciones abiertamente confrontacionales, hasta lograr desarticular la Federación de Estudiantes y controlar los sindicatos de docentes y trabajadores. Con el copiamiento de espacios simbólicos y doctrinarios (pintas, debates, actos político-culturales),

generó una oleada represiva por parte del Estado, que tuvo su punto más alto en las intervenciones policiales de 1987, y la intervención militarizada de la Universidad desde 1991.

1.5.5.2.5. Aparato partidario del PCP-SL

La importancia de la Zona Este en los planes estratégicos del PCP-SL obligó a su Comité Metropolitano a conformar dos Comités zonales: el Comité Zonal Este, que actuaba de preferencia en las zonas del Agustino, Ate Vitarte y Canto Grande; y el Comité Zonal Chosica, que comprendía Ñaña, Chaclacayo y Chosica. Este último se desprendió a finales de 1993, conformando su propia zonal y cometiendo atentados con sus propios destacamentos. Socorro Popular, por su parte, operaba a través de la sección de Obreros, Barrios y Trabajadores (OBT) en diversas zonas en la capital, aunque consideraba la Zona Este como el eje de su accionar subversivo.

El Comité zonal Este del «Metro» se considera que era de gran importancia por concentrar el proletariado (Ate Vitarte) y por asentar la «Luminosa Trinchera de Combate» del penal de Canto Grande. En 1984, el zonal Este contaba con dos milicias, una de las cuales llegó a planificar asesinatos selectivos en la zona Centro y Norte. En enero de 1987, los mandos coordinaron el asalto a la Fábrica Nylon. A partir de 1993 surgieron problemas internos, pues uno de los miembros de la célula se dedicó a cometer asaltos en nombre del partido, para beneficio personal, mientras en Chosica ese mismo año se conformó un nuevo comité zonal, realizando diversos actos de sabotaje, explosiones, aniquilamientos selectivos y asaltos en la zona.

Desde 1993, Pedro Ruiz Canales, un trabajador de la Universidad de La Cantuta, era el responsable de un destacamento de la zonal de Chosica. Ruiz era parte del Movimiento de Artistas Populares, que actuaba dentro de la UNE, conformado mayoritariamente por músicos folclóricos. Cabe destacar además que el 22 de junio de 1991 fue detenido por el GEIN el profesor Víctor Zavala Cataño, quien tenía vínculos con la Universidad de La Cantuta desde el inicio de la guerra interna. Zavala se desempeñaba como mando militar y subsecretario de la célula de dirección de todo Socorro Popular, encontrándosele cuantiosa documentación del accionar de los destacamentos especiales y zonales del PCP-SL, entre los que se encontraban los destacamentos de la sección de Familiares.

La intervención policial en el penal de Canto Grande, entre los días 6 y 9 de junio de 1992, culminó con el asesinato de destacados cuadros de Socorro Popular. Al parecer, dicha acción fue uno de los detonantes de la ola de violencia senderista que culminó en el atentado a Tarata, el 16 de julio de 1992. Dos días después, se llevó a cabo una operación paramilitar en La Cantuta, que culminó con la ejecución extrajudicial de 9 estudiantes y un profesor de dicha casa de estudios.

1.5.5.2.7. Incursión de las fuerzas del orden y los grupos paramilitares

Los operativos combinados de las fuerzas del orden en los asentamientos humanos de la Zona Este ocurrieron con mayor fuerza a partir de los noventa, aunque en el caso de Huaycán los operativos policiales se iniciaron en 1987, cuando se detuvo a cerca de 300 pobladores en dos rastrillajes sucesivos. En un tercer momento, el número de detenidos llegó a 800. Los rastrillajes se realizarían intermitentemente hasta marzo y abril de 1991. Las fuerzas armadas habían elaborado un diagnóstico de la presencia subversiva en Lima, dividida en 4 sectores: Norte, Sur, Este y Oeste. El general EP César Ramal Pesantes, y luego el general EP Luis Pérez Document, tuvieron sucesivamente a su cargo los sectores Sur y Este, mientras se desempeñaban como comandantes de la División de Fuerzas Especiales (DIFE), con sede en Chorrillos. En 1991 se instalaron bases militares en Huaycán y Raucana, a la vez que se intervino militarmente un conjunto de universidades nacionales percibidas como centros de adoctrinamiento e incluso de preparación militar de cuadros subversivos. Entre las universidades intervenidas se hallaba la Universidad La Cantuta.

Paralelamente, insurgían los grupos paramilitares en la escena política de la Zona Este. El 27 de abril de 1989, presuntos paramilitares asesinaron a Heriberto Arroyo Mío, diputado de IU en Chaclacayo. El 18 de julio de 1992 ocurre el asesinato de estudiantes universitarios de la Cantuta sindicados como terroristas por los agentes de inteligencia y la tropa instalada en dicha universidad.

Las bases militares instaladas en La Cantuta, Huaycán y Raucana terminaron por diluir las estrategias senderistas combinando acciones cívicas con la represión abierta, como lo ocurrido en el asesinato de estudiantes de la UNE La Cantuta.

1.5.6. Zona II: San Juan de Lurigancho

Para los fines de nuestra investigación, la zonificación de Lima Metropolitana distingue a San Juan de Lurigancho como una zona diferenciada de los distritos del Cono Este, por el hecho que fue el principal receptor de la migración interna durante los años de mayor violencia. Esta situación repercutió profundamente entre los pobladores, registrándose el mayor número de asentamientos humanos creados entre 1981 y 1993 en Lima Metropolitana.

El distrito no sólo tiene la mayor concentración y crecimiento demográfico en el ámbito metropolitano, sino que además registra un alto porcentaje de población juvenil y de familias recientemente constituidas, producto de la migración interna. Diferenciamos hasta tres zonas al interior del distrito, cada una con especificidades dentro del proceso de violencia política:

Zona Baja (60's-70's): Las Flores, San Hilarión, Zárate, Tres Compuertas, Canto Grande, San Rafael, Canto Bello, Canto Sol, Canto Nuevo, Chacarilla de Otero, Caja de Agua, Santa Elizabeth.

Intermedia (70's-80's): Huáscar, Huanta 1, Bayóvar, Proyectos Especiales, Arriba Perú, 10 de Febrero, Villa Hermosa, 9 de Octubre.

Alta (80's- 90's): Huanta 2, Enrique Montenegro, Cruz de Motupe, José Carlos Mariátegui, Santa María, Ciudad de los Constructores.

Presentaremos el panorama demográfico, económico y político de San Juan de Lurigancho, a manera de tendencias que repercutieron en la evolución del proceso de violencia, y cuyas secuelas se extienden hasta el día de hoy, en la marginación, la pobreza, la violencia cotidiana y los niveles de desarticulación social existentes en la zona.

1.5.6.1. Datos generales

1.5.6.1.1. Tendencias sociales, económicas y políticas

San Juan de Lurigancho es el distrito de mayor concentración y crecimiento demográfico de Lima Metropolitana. Su población registró un crecimiento de 12.8% anual durante las dos últimas décadas del siglo XX, pasando de 86,173 habitantes en 1972 a 260 mil en 1981. En 1986 la cifra se incrementó a 480 mil y para 1990 se calculaba en 780 mil habitantes. En 1993, San Juan de Lurigancho registraba en términos absolutos la mayor cantidad de habitantes (591,213) de los distritos limeños, y se encontraba entre los que registraban el mayor número de asentamientos humanos. Es decir, entre 1940 y 1980 su población se incrementó en 461 veces, mientras que entre 1972 y 1981 llegaron cada año 20 mil nuevos pobladores. La tasa de crecimiento promedio anual del distrito subió de 9.9% en 1961 —en que contaba con 9,456 habitantes— hasta 22% en 1972, alcanzando el 13% en 1981, con 259,390 habitantes. Ya en 1961, un 53% de la población distrital provenía de provincias. El 92% de los jefes de familia moradores de Canto Grande eran migrantes.

En sus inicios, San Juan de Lurigancho tuvo pocos asentamientos humanos importantes (Zárate, Tres Compuertas y Canto Grande), pero con el transcurso del tiempo estos llegaron a urbanizarse y constituir los principales centros poblacionales. Además, a medida que se incrementó la tasa de crecimiento poblacional, surgieron nuevos asentamientos de diferente procedencia. A inicios de los años ochenta, el distrito presentaba una gran heterogeneidad, manifiesta en una gran cantidad de invasiones, asociaciones y programas municipales de vivienda.

Durante los ochentas, las invasiones a tierras eriazas se multiplicaron, con familias que convirtieron las antiguas haciendas en sus lugares de residencia. Con la nueva ley de Municipalidades, las autoridades municipales crearon varios Programas Municipales de Vivienda, como Esmeralda de los Andes, Huanta y Cruz de Motupe. De esta manera, se sentaron las bases de una ocupación territorial que terminó rebalsando la capacidad gubernamental y municipal para atender a estos nuevos contingentes migratorios.

1.5.6.1.2. Diferenciación interna y procedencias regionales

En 1981, San Juan de Lurigancho presentaba la más alta tasa de desocupación de Lima Metropolitana (12.6%), con una PEA de 82,231 habitantes (Henríquez y Ponce, 1985), lo que correspondía al 24% del total de la población distrital, que bordeaba los 260 mil habitantes.

Podemos señalar algunos asentamientos específicos como ejemplo de la heterogeneidad de procedencias regionales. Por ejemplo, en «Esmeralda de los Andes», predominaron personas procedentes de Ayacucho, distribuidas entre Huanta I en la zona intermedia y Huanta II en la parte alta. En dichos asentamientos se concentró, principalmente entre 1983 y 1987, un importante volumen de población desplazada por la violencia política en las áreas rurales. Durante los ochenta, a nivel metropolitano, el primer contingente de desplazados procedió de Ayacucho y Huancavelica, que junto con Apurímac y Junín registraron el 86% del total de desplazados.

Lima llegó a concentrar en los noventa un 26% de la población desplazada a nivel nacional.

Similar fue el caso del AH Juan Pablo II, que se formó en 1984, cuando durante el gobierno municipal de Barrantes (IU) se promovieron los Programas Municipales de Vivienda, como los de Huaycán, Laderas de Chillón y el Arenal de Canto Grande. Los pobladores pueblan el asentamiento en 1985, bajo el aval de la municipalidad de Lima, integrándose personas procedentes principalmente de Huancayo, Huancavelica, Ayacucho y Cuzco. En esas circunstancias, se organizaron asambleas para discutir las necesidades básicas, apareciendo desde esa fecha vecinos con un lenguaje político radical.

El caso del asentamiento humano Huáscar es singular. Fue creado frente a la toma de tierras que realizaron en febrero de 1976 alrededor de 4700 familias en la margen izquierda del río Rímac, a la altura del Puente Huáscar. Se llegaron a formar en su etapa inicial hasta 13 grupos residenciales de aproximadamente 80 familias cada uno, existiendo en 1980 un total de 21 grupos.

Por último, el AH José Carlos Mariátegui surgió a raíz de una toma de tierras efectuada el 14 de octubre de 1984, por un grupo de 200 familias procedentes de los callejones tugurizados de Barrios Altos y el Callao, las cuales frente al incremento de los alquileres, se organizaron y decidieron tener sus propios terrenos en esta zona, solicitaron la lotización y el Estado, a través de ENACE, aprobó y empezó a lotizar y ubicar a los pobladores en 1986.

1.5.6.1.3. Situación política

En los años ochenta hubo una fuerte presencia de la izquierda en el distrito, sobre todo del PRT de Hugo Blanco, de Patria Roja y del PUM, principalmente en la parte media y alta del distrito. Pero las disputas entre los grupos de izquierda terminaron quebrando los intentos de unidad, dejando la posibilidad para que, en los ochenta, los grupos subversivos puedan captar a los dirigentes que se habían radicalizado con estas experiencias.

Ello explica que en 1978, con la transición y restauración del orden democrático, los resultados electorales registraran una alta votación en la zona por los candidatos de Izquierda Unida a la Asamblea Constituyente, alcanzando el 46.6% del voto del distrito y el 29.9% a nivel nacional. Sin embargo, a pesar de predominar los grupos de izquierda en San Juan de Lurigancho, observamos que las orientaciones políticas de la población empezaron a fluctuar desde las elecciones presidenciales, saliendo vencedor Belaunde. También salió ganador el partido de gobierno en las elecciones municipales de noviembre, principalmente por la debilidad de la izquierda, expresada en divisiones y disputas internas.

Como sugiere Tuesta (1989), hay una relación entre pobreza urbana y la votación por partidos de izquierda, pero en San Juan de Lurigancho pareciera que los votos fluctúan de acuerdo al momento político que vive el país. En efecto, a partir de 1990 el municipio, a cargo de Zazzali (IU), estableció una relación clientelar con el gobierno de Fujimori, tendencia que se volvió predominante cuando las listas independientes se supediten al fujimorismo, ganando la opción de Vamos Vecino y su candidato Ricardo Chiroque.

Votación en SJL en elecciones municipales y presidenciales

DISTRITO	1978	1980	1980	1983	1985	1986	1990	1998
San Juan de Lurigancho	IU	AP	AP	IU	APRA	APRA	IU	Vamos Vecino

Fuente: Tuesta (2000).

1.5.6.1.4. Contexto local durante los ochenta

Las movilizaciones de fines de los setentas articularon los intereses de los pobladores de las barriadas con las reivindicaciones del movimiento obrero, frente a cuyas movilizaciones el gobierno decretó el Estado de Emergencia en la capital, al tiempo que se producían nuevas invasiones en las zonas periféricas de la capital. Como vimos en la Zona Este de Lima Metropolitana, en 1978 se lograron organizar los Comités de Coordinación y Lucha barrial, luego se constituyó la Confederación Nacional de Pueblos Jóvenes y urbanizaciones populares del Perú, bajo la iniciativa del PC Unidad. En este contexto, el Estado transfirió los problemas de las barriadas a las municipalidades, mientras los pobladores de las barriadas apoyaban activamente la huelga de los maestros del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación Peruana (SUTEP).

Frente al abandono estatal, el empeoramiento de la situación económica, y el crecimiento poblacional, surgieron movilizaciones populares por mejores condiciones de vida. En octubre de 1980, diez mil pobladores de 10 pueblos jóvenes de San Juan de Lurigancho hicieron una marcha hasta el Congreso, exigiendo solución al problema del agua y desagüe. Lograron que los senadores pidan un «Plan de Emergencia» para Canto Grande, pero como no se efectuaron las medidas,

recurrieron a nuevas movilizaciones, siendo la mayor aquella que reunió cerca de 20,000 habitantes aproximadamente en febrero de 1981. En aquella ocasión, las fuerzas policiales reprimieron a la población, resultando heridos siete pobladores y detenidos otros diez.

Igualmente a inicios de los ochenta, la situación de marginación económica de las familias de San Juan de Lurigancho era peor que las del resto de Lima, pues alrededor de las 4/5 partes de las familias recibían per cápita menos del salario mínimo vital. Asimismo, la tasa de crecimiento de la actividad general en la PEA no aumentó, a pesar del crecimiento demográfico. La tasa de desocupación en 1981 se hallaba por encima de la tasa de las provincias de Lima y Callao: 12.6% frente al 6.7% de Lima y Callao. Según el censo de 1981, el distrito contaba con 27 pueblos jóvenes, 16 cooperativas de vivienda, 42 asociaciones de vivienda y 23 urbanizaciones, y su población juvenil representaba el 6% de la población total de Lima.

En síntesis, el contexto local era muy inestable a inicios de los ochenta, con alta precariedad económica y predominio político de partidos de izquierda, que sin embargo sufrirán el desgaste de sus propuestas por sus disputas internas, así como por el ataque de los grupos subversivos, principalmente el PCP- SL. La ingente población juvenil del distrito será una fuerte motivación para que el PCP-SL opere en este espacio. Por otra parte, los operativos policiales y los rastrellajes del ejército, efectuados en las zonas intermedias y altas, hicieron que las fuerzas del orden fueran percibidas como los desestructuradores del orden social, mientras el PCP-SL pretendía montarse sobre el vacío de poder existente para imponer un nuevo orden.

1.5.6.2. Historia del conflicto armado interno

1.5.6.2.1. La estrategia subversiva

La comprensión del proceso del conflicto armado interno al interior de las partes altas, intermedias y bajas de San Juan de Lurigancho implica reconocer diversos mecanismos (persuasivos, pedagógicos o coercitivos) de los grupos subversivos en los asentamientos humanos del distrito, particularmente en las zonas altas (como Enrique Montenegro, La Cruz de Motupe, José Carlos Mariátegui y Huanta II) e intermedias (principalmente en Huáscar, Juan Pablo II, Bayóvar y Huanta I). Una de las líneas explicativas tienen que ver con el hecho de que SL, principal actor en esta escena, desplegó una lógica de doble vía y una estrategia de legitimación como garante del orden.

El PCP-SL predominó en San Juan de Lurigancho, ejecutando acciones y atentados contra las autoridades y las escasas patrullas y puestos policiales, apuntando a debilitar la presencia del Estado en la zona, mientras buscaba incrementar su fuerza a través del sometimiento de actores claves vinculados a la educación y la cultura popular, llegando a copar la dirigencia ejecutiva del SUTE local. Sin embargo, la represión policial y militar de los noventa llevó a que muchos

dirigentes barriales, algunos de ellos vinculados al PCP-SL, fueran detenidos en operativos de rastrillaje. Cabe señalar además que en esta zona se produjo uno de los sucesos más violentos de la guerra interna en la capital, como fueron las masacres de cientos de reclusos acusados de terrorismo en los penales de Canto Grande, durante los gobiernos de Alan García (1986) y Alberto Fujimori (1992).

Según diversas investigaciones, las zonas con mayor presencia subversiva de San Juan de Lurigancho se concentraban en los asentamientos humanos de la parte alta de Canto Grande. Ubicados entre 300 a 400 metros sobre el nivel del mar, en una estratégica zona de escape, ya que por los cerros (600 metros de altura) los pobladores se conectaban con el cono norte (Comas) y la Carretera Central (Vitarte, vía Jicamarca), en una «doble vía» utilizada regularmente por los pobladores para desplazarse. La lógica del PCP-SL reproducía este uso del espacio, mientras su estrategia perseguía también dos objetivos: por un lado, el copamiento de las dirigencias vecinales, mediante amenazas y en algunos casos la muerte de quienes opusieron resistencia; por otro lado, como garante del orden social.

1.5.6.2.2. Ataques a autoridades y dirigencias barriales

Los ataques al alcalde de IU Oscar Venegas (1984-1986) vinieron de parte del gobierno aprista. Mediante el llamado Programa de Vivienda Municipal Gratuita, el Municipio intentó planificar las invasiones de las primeras oleadas de desplazados, pero el alcalde Venegas, por su procedencia ayacuchana, fue objeto de represión por el gobierno aprista, llegando a ser acusado de terrorista, fundamentalmente por su defensa de los dirigentes encarcelados durante la matanza de los penales. El alcalde fue víctima de un atentado en su consultorio médico, siendo objeto de persecución durante su segundo período (1993-1995) por el gobierno de Fujimori. Finalmente, terminó detenido, defenestrado, y su Consejo Municipal, en un principio formado por 15 regidores, terminó con tres, debido a rencillas internas entre las diferentes fracciones partidarias.

Pero es en la gestión municipal posterior de Zazzali (IU) que se manifestaron las amenazas explícitas del PCP- SL a la autoridad edil.

Respecto a las organizaciones barriales, hay que destacar que, debido a la intensificación del tráfico de lotes en el distrito, diversos pobladores se movilizaron contra las nuevas invasiones, motivo por el cual diversos dirigentes fueron acusados mediante volantes anónimos de ser senderistas. A inicios de los noventa, el PCP-SL tenía una mayor presencia en las zonas media y alta, y en algunos barrios marginales. En ese escenario, algunos dirigentes fueron asesinados por el PCP-SL, como sucedió en Juan Pablo II el 14 de setiembre de 1991, en vísperas del aniversario del asentamiento, con el subsecretario general Fortunato Collazos Crispín y el secretario de prensa y propaganda, Alfredo Aguirre Berrocal. Algunas versiones afirman que los dirigentes se habían

negado a prestar sus altavoces al PCP-SL. El grupo de atacantes fue como de veinte personas, hombres y mujeres, vestidos con ponchos.

El 27 de octubre de aquel año se produjo una movilización de repudio a los atentados, convocada por la Municipalidad. La noche anterior, los senderistas colocaron explosivos en la vía pública y en la madrugada una columna senderista se desplazó por las calles de la parte alta, intentando bloquear las pistas. A raíz de estos asesinatos se consideró este asentamiento como «zona roja», instalándose una base militar en el local comunal, que se retiró dos años después. En ese período el temor se mantuvo porque el PCP-SL había dictaminado la muerte de los que colaboraran con las fuerzas armadas, pero los pobladores no volvieron a sufrir amenazas directas.

Sin embargo, en otras zonas los asesinatos de dirigentes fueron en aumento. En abril de 1992 fue asesinado el hermano del dirigente vecinal del asentamiento humano «Esmeralda de los Andes» (Huanta); el 29 de abril fue muerto un dirigente de la asociación de vivienda «Proyectos Especiales» en la zona intermedia del distrito, y al día siguiente cayó asesinado Juan Crisóstomo Casasola Zavala, ex dirigente de la asociación de vivienda «Canto Grande» y subdirector del colegio nacional mixto Ricardo Palma. Los subversivos dejaron sobre su cuerpo un cartel que decía: «Así mueren los soplones», «Muerte a los que apoyan a las Fuerzas Armadas», «Muerte a las cabezas de las rondas urbanas». En suma, estos y otros atentados se encuadraban en la lógica subversiva de copar espacios políticos en las zonas periféricas de la ciudad. A estas acciones se le suman, por supuesto, las acciones represivas de las fuerzas del orden, que pusieron entre dos fuegos a las ya débiles organizaciones populares.

1.5.6.2.3. Características del accionar subversivo

El accionar subversivo en San Juan de Lurigancho fue una labor eminentemente política. Cabe añadir que en este distrito destacó el enfrentamiento entre Patria Roja (partido que controlaba el sindicato de maestros) con el PCP-SL, que para entonces enfilaba sus baterías hacia el control del gremio magisterial. Por lo demás, el abandono estatal manifiesto en la ausencia de efectivos y puestos policiales, así como la crisis de representatividad de la izquierda legal, brindaban condiciones para que el accionar del PCP-SL buscara legitimación a través de ajusticiamientos a delincuentes y dirigentes corruptos, amparados en un discurso moralista y justiciero. Por su parte, el MRTA se presentó esporádicamente en acciones de propaganda puntuales y aisladas, pero indiscutiblemente el actor protagónico en la zona era el PCP-SL, que utilizó, al igual que en todo el país, mecanismos de legitimación como garante del orden social. En Huáscar, el PCP-SL asesinó a dos repartidores de drogas e incluso llegó a ejecutar a una familia de delincuentes, lo cual fue percibido con simpatía por la población. Aparentemente, fue a raíz del asalto a una senderista que el partido liquidó a estos delincuentes, hecho que algunos vecinos llegaron a celebrar «con unas cervezas». También se legitimaban con un discurso moralista, apelando a la pureza ideológica de

sus miembros frente a la corrupción de autoridades y dirigentes. En el enfrentamiento entre el PUM y Patria Roja por captar las dirigencias de la Federación de Organizaciones Populares y Pueblos Jóvenes, las disputas y el sectarismo de las cúpulas partidarias de ambos partidos contrastaba con el discurso moralizador que permitió al PCP-SL captar algunos de estos cuadros dirigenciales.

1.5.6.2.4. Diferencias y similitudes entre los grupos subversivos

El PCP-SL llegó a tener mayor presencia que el MRTA en todas las zonas de San Juan de Lurigancho, a diferencia de la Zona Norte de Lima Metropolitana, donde el MRTA llegó a predominar ocasionalmente, como en el caso de Carabayllo en los 90's. Debemos destacar la importancia de Patria Roja, organización legal que mantuvo una dura disputa con el PCP-SL por el control de las organizaciones barriales, hasta que la represión policial terminó por desarticular las dirigencias de izquierda, siendo detenidos muchos de sus líderes acusados de terrorismo desde mediados de los ochenta.

Además de actuar principalmente de manera encubierta y clandestina, el PCP-SL también recurría abiertamente a movilizaciones e izamientos de bandera como formas de propaganda, así como sabotajes y actividades culturales, intentando copar las principales dirigencias que tenían presencia de izquierda. En Juan Pablo II, el MRTA llegó a manifestarse a través de una ONG que ofreció implementar una biblioteca comunal. En cambio, en Canto Chico, durante la invasión de una zona arqueológica, los dirigentes que se opusieron a dicha invasión fueron amenazados con membretes del MRTA y el PCP-SL asesinó al presunto abanderado del MRTA. Salvo estos casos, se puede afirmar que en las zonas altas e intermedias la presencia del MRTA fue nula.

1.5.6.2.5. Incursión de las fuerzas del orden y los grupos paramilitares

Los ochenta y noventa fueron en general un período difícil para los barrios marginales, golpeados no sólo por los grupos subversivos sino también por las Fuerzas del orden. En los 80's, la represión se manifestaba principalmente mediante batidas, acentuándose en los 90's con operativos de rastrillaje. La presencia de las fuerzas policiales en el distrito era prácticamente inexistente. A mediados de los 80's apenas existían comisarías en Canto Rey, Canto Grande, La Huayrona y Zárate, que con el recrudecimiento de la violencia se refugiaron en sus muros evitando salir en las noches. En esos años se ejecutaron asesinatos selectivos de policías en la vía pública. Las dos comisarías que existían en la zona intermedia de Canto Grande fueron varias veces atacadas y voladas, motivo por el cual se cerraron. Se instaló en los 90's un local de la Policía Técnica (PIP), que se hallaba más cerca de la zona baja que de la intermedia. Los pobladores afirman que la nula presencia policial permitió que las agrupaciones subversivas actuaran libremente en la zona,

mediante marchas nocturnas, visitas a mercados, volanteos e irrupciones armadas en las reuniones vecinales.

En el proceso electoral de 1989-1990, Alan García perdió popularidad, llegando su desprestigio a niveles críticos. Su popularidad, de 40% en julio de 1988 cayó hasta el 11.4% en julio de 1989. Diversos sectores pidieron la renuncia del presidente. A ello se suma el avance de las acciones del PCP-SL y el MRTA tanto en la ciudad como en otras zonas del país.

Como resultado de este avance se instalaron bases militares en Bayóvar, Juan Pablo II y, posteriormente, en Santa María. Es significativo que en Huáscar no se llegó a instalar una base militar, principalmente por la resistencia de la población.

En 1990, antes de la instalación de bases militares en San Juan de Lurigancho, predominaban las «acciones cívicas», mediante actividades de servicio a la población, como el reparto de víveres, corte de pelo y atención médica. Con el gobierno fujimorista la tendencia represiva se acentuó, por ello, nadie sabía si los asesinatos de dirigentes eran obra del PCP-SL o del gobierno. En las zonas altas de Canto Grande (Motupe, Mariátegui, Montenegro, Bayóvar, Santa María), las patrullas del Ejército aparecían de madrugada y, sin ningún comunicado, arremetían contra las casas de los pobladores. Si era la casa de un dirigente, éste era golpeado acusado de subversivo. Llegaban con una relación e intervenían sus casas, a menudo llevándose objetos de valor. Frente a estos abusos, en Huáscar se nombró una Comisión contra los rastrillajes, pero su presidente fue encarcelado junto con otros dirigentes.

En este contexto el Comando Rodrigo Franco, vinculado a personajes del Ministerio del Interior y de la Policía, comenzó a intensificar sus acciones. Muchas de sus actos fueron, precisamente, dirigidos contra los dirigentes opuestos al régimen. Así, a fines de 1989, se encubrieron los asesinatos de líderes mineros en Canto Grande atribuyéndoselos al PCP-SL cuando en realidad respondían a ese grupo paramilitar. El asesinato de Saúl Cantoral, presidente de la Federación Minera, en San Juan de Lurigancho a manos del Comando Rodrigo Franco, fue denunciado por El Diario como una muestra del genocidio del gobierno aprista, aunque aludiendo principalmente a la matanza de los penales de 1986. Los sindicatos mineros, en respuesta a los asesinatos de Cantoral, Consuelo García y Víctor López, convocaron a un paro de 24 horas, planteando la autodefensa de sus organizaciones. Pero en general el Comando Rodrigo Franco mantuvo en la práctica poca presencia operativa en el distrito, realizando pintas o enviando amenazas a dirigentes barriales y autoridades de izquierda que denunciaban la corrupción del gobierno aprista y el programa del PAIT.

1.5.7. Zona III: Norte de Lima Metropolitana

La Zona Norte de Lima Metropolitana está conformada por la mayoría de los distritos pertenecientes al denominado «Cono Norte»: Comas, Independencia, Carabayllo, San Martín de

Porres, Los Olivos, Callao Puente Piedra, Ventanilla, Ancón y Santa Rosa, cuya población en 1990 representaba el 21% de la población del área metropolitana..

Para la comprensión del proceso de violencia política, se ha convenido en destacar, a manera de tendencias, la evolución demográfica y la heterogeneidad socioeconómica de los distritos de la Zona. Luego se presenta el contexto local existente a inicios de los 80's, para seguidamente analizar la dinámica particular de la guerra interna en esta zona de la capital.

1.5.7.1. Datos generales

1.5.7.1.1. Concentración y crecimiento poblacional

Según el censo de 1993, el Cono Norte era el más poblado de los conos de Lima Metropolitana, siendo el tamaño de su población (1'524,252 habitantes) equivalente a la suma de las tres ciudades con mayor población del Perú después de Lima (Arequipa, Trujillo y Chiclayo). Además, el Cono Norte ocupaba la menor área urbana, siendo por ello la zona más densa de Lima Metropolitana.

Dentro de esta mayor concentración y densificación destacan distritos como San Martín de Porres y Comas. Según el censo de 1981 el distrito más poblado de Lima era San Martín de Porres, con 404,856 habitantes, mientras que el Cono Norte agrupaba en 1992 a 355 nuevos asentamientos humanos, correspondiendo a Comas e Independencia el mayor número, con 93 y 74 asentamientos respectivamente.

El promedio anual de crecimiento de la población aumentó significativamente en el último período censal: desde 1961 hasta 1981 su población representaba al 30% de toda la capital, con un crecimiento promedio de 39 mil personas al año. En cambio, entre 1981 y 1993, el Cono Norte registró un crecimiento de 48,605 personas al año, representado el 41.5% del crecimiento anual de la metrópoli en ese mismo período. En resumen, su ritmo de crecimiento ha sido muy acelerado, observándose que mientras la población del área metropolitana se multiplicaba por 11 veces entre 1940 y 1998, el Cono Norte multiplicaba su población 110 veces en ese lapso.

La tendencia de mayor crecimiento del Cono Norte es hacia los distritos más alejados del centro, que son también los menos densos. Sin embargo, San Martín de Porres y Comas (junto con San Juan de Lurigancho, como vimos en el capítulo anterior), fueron distritos que mantuvieron altas tasas de crecimiento poblacional, registrándose durante el período de 1981 a 1990, una tasa media anual de 4.4% en San Martín de Porres y 3.4% en Comas.

1.5.7.1.2. Situación política

Durante el gobierno de las fuerzas armadas se consolidó la presencia de la izquierda en la organización y movilización barrial, lo cual influyó en la consolidación de una identidad clasista en

los pobladores movilizados de los sectores populares. Con la apertura de un nuevo ciclo electoral en 1978, se observó que las mayores votaciones que logró Izquierda Unida en la zona fueron en Independencia, 63.8% de los votos en 1978 y el 24.09 % en 1980, en las elecciones municipales, y 49.39% en las presidenciales. Fue así que a lo largo del período 1978-1986, el voto se expresó en una distribución territorial que estuvo en función de las diferentes opciones políticas presentes en dicho período.

Votación de los partidos en los distritos más pobres de la Zona Norte
Primer lugar por distrito (1978-1998)

<i>DISTRITO</i>	<i>1978</i>	<i>1980</i>	<i>1980</i>	<i>1983</i>	<i>1985</i>	<i>1986</i>	<i>1990</i>	<i>1998</i>
Carabaillo	IU	AP	IU	IU	APRA	APRA	IU	Vamos Vecino
Comas	IU	AP	IU	IU	APRA	IU	IU	Somos Perú
Independencia	IU	AP	IU	IU	APRA	IU	IU	Listas Independientes
San Martín de Porres	IU	AP	IU	IU	APRA	IU	Fredemo	Somos Perú

Fuente: Tuesta (1989), Alternativa (2002), Cuánto (2002)

Las orientaciones políticas experimentaron un giro a mediados de los 90's, lo cual se expresó en los resultados de las elecciones municipales de 1998, donde prácticamente desaparecen de escena los partidos de izquierda. El desplazamiento de las orientaciones de izquierda en el contexto de la guerra interna, constituye así una tendencia que se convertirá, a medida que los grupos subversivos demuestren un alto grado de influencia y una mayor presencia distrital, en medio del vacío político y del incremento de la crisis económica.

1.5.7.1.3. Contexto local

Durante los años 80's hubo una mayoritaria presencia de autoridades de izquierda en la zona, en un contexto atravesado por tres factores fundamentales: la profundización de la crisis económica; la informalización de la economía y la agudización del conflicto armado interno.

Como respuestas a la crisis económica, las organizaciones barriales conformaron Coordinadoras de carácter distrital, integrándose en Centrales de ámbito metropolitano y nacional. Se inició un proceso de politización partidaria, por el cual se desgastaron las organizaciones territoriales y cobraron auge las organizaciones de supervivencia, como el Vaso de Leche y los Comedores Populares. A su vez, la violencia política desatada con mayor intensidad en el campo, produjo nuevas olas de inmigrantes en la capital, quienes invadieron las faldas de los cerros aledaños, ocupando territorios eriazos y aprovechando los servicios existentes, ocasionando su progresivo deterioro.

A esto se suma la importancia demográfica de distritos como Independencia y San Martín de Porres, con lo cual tenemos un contexto local comercialmente dinámico y políticamente estratégico, por la densidad poblacional existente y su repercusión en las ofertas electorales de los partidos, que durante los 80's serán uno de los actores más afectados por el accionar de los grupos subversivos, registrándose un incremento de asesinatos de alcaldes de distintas tendencias, así como de dirigentes de izquierda. No hay que olvidar que el MOTC (Movimiento de Obreros y Trabajadores Clasistas) creado por el PCP-SL, tuvo una de sus primeras incursiones en San Martín de Porres, provocando el incendio de la municipalidad el 13 de junio de 1980.

1.5.7.2. Historia del conflicto armado interno

Aunque el PCP-SL no fue el único actor, destacó notablemente en el desarrollo de la historia del conflicto armado interno en la zona, principalmente frente a su principal rival, el MRTA. El PCP-SL desarrolló básicamente una estrategia de infiltración y amedrentamiento, a través del sabotaje y ataque sistemático a las autoridades locales y a los representantes del Estado, accionar que se intensificó a mediados de la década de 1980, cuando se preparaba el cerco a la ciudad (1985-87). Los asesinatos selectivos se expandieron a inicios de la década de 1990, abarcando dirigentes barriales y vecinales, combinando los grupos subversivos estrategias de tipo persuasorio con otras propiamente coercitivas (1991-93). Con este tipo de atentados, el PCP-SL buscaba debilitar políticamente la presencia del Estado, creando un clima de terror y zozobra en la población civil, todo esto en el marco de su concepción de «equilibrio estratégico». A la vez, el PCP-SL iba construyendo un frente de apoyo en la zona, a partir de organismos generados como el MOTC, y de aparatos centrales como Socorro Popular y el Comité Zonal Norte del «Metro». Por otra parte, los agentes del Estado se concentraron en reprimir duramente a la población, principalmente los desplazados por la violencia en el espacio rural. Por circunstancias de ubicación geográfica, en este escenario ocurrió la muerte de Pedro Huilca, de por sí un caso complejo que trasciende el ámbito zonal y remite a un análisis metropolitano y nacional de la violencia. Finalmente, veremos que el rechazo a la violencia por parte de los pobladores se manifestó desde diversos frentes y a través de marchas por la paz, aunque sin un apoyo sostenido, optándose por una salida pragmática, en medio del declive de las propuestas de izquierda y de los grupos subversivos. En este escenario el fujimorismo se presentó en los 90's como la única opción de orden frente a la inestabilidad política y la incertidumbre social (1992-2000).

1.5.7.2.1. Las estrategias subversivas

Se puede afirmar que desde mediados de los 80's la presencia del PCP-SL en los distritos del Cono Norte se empezó a consolidar a través de las nuevas invasiones, utilizadas como lugares de refugio

por los senderistas, los cuales se presentan como parejas o familiares en un intento de mimetizarse con la población. Los problemas de titulación entre los distritos de la Zona Norte facilitaron la invasión de las zonas altas de Comas e Independencia, y con ello esta primera forma de infiltración. Otra modalidad de ingreso fue priorizando los espacios que le pudieran permitir la expresión de un discurso radicalizado, con miras a la captación de cuadros universitarios, como fueron los distritos de Independencia o Comas.

Sin embargo, la primera acción conocida del PCP- SL en los distritos populares de Lima tuvo lugar en San Martín de Porres, cuando integrantes del Movimiento de Obreros y Trabajadores Clasistas (MOTC) incendiaron la municipalidad el 13 de junio de 1980. Este distrito fue uno de los puntos urbanos en que el PCP-SL alcanzó mayor fuerza y presencia en los años anteriores a la guerra. Sin embargo, no fue únicamente el PCP-SL quien tuvo mayor presencia en una zona caracterizada por la gran predominancia de grupos de izquierda desde los años setenta, pero a través de diferentes mecanismos de captación (escuelas populares, grupos musicales, academias preuniversitarias y organismos de fachada) el PCP-SL destacará sobre los demás grupos, sobre todo a fines de los 80's e inicios de los 90's, durante las convocatorias a «paros armados» y a través de acciones de sabotaje y asesinatos selectivos, estos últimos con mayor fuerza en los 90's.

A fines de los 80's la lógica subversiva se orienta al copamiento de las dirigencias barriales de los asentamientos humanos, aniquilando a los dirigentes que se oponían a su presencia. Por su parte, las acciones del MRTA se centraron en las tomas de emisoras radiales, locales escolares y camiones distribuidores de víveres, que eran repartidos entre la población. Por ejemplo, el 8 de octubre de 1984, un grupo del MRTA tomó «Radio Comas» y propaló un mensaje por el 17º aniversario de la muerte del Ernesto «Che» Guevara. Asimismo, el MRTA tomó en dos oportunidades el mercado de Collique y de Comas. Incluso en mayo de 1984 utilizó el sistema radial del mercado de Comas para emitir proclamas subversivas durante 20 minutos, asaltando al mismo tiempo un camión de reparto de leche que fue regalada al interior del mercado. A partir de los 90's tanto el MRTA como el PCP-SL intensificaron los saqueos en los mercados de la zona, así como los asaltos a camiones repartidores.

Recordemos, por último, que en el Cono Norte hubo desde los setenta una gran predominancia de grupos de izquierda radical (Puka Llacta, UNIR Bolchevique, el Frente Patriótico de Liberación, etc), muchos de cuyos militantes se aglutinaron alrededor del Frente de Defensa de Carabayllo, movimiento territorial que buscaba resolver las reivindicaciones del distrito, y que fue saludado por El Diario, como una nueva forma de lucha barrial.

1.5.7.2.2. Ataques a municipios y autoridades

Las acciones de sabotaje y amedrentamiento de los grupos subversivos tuvieron distintos objetivos. Por un lado, los establecimientos públicos como las comisarías; y por otro, las instalaciones

municipales. En efecto, el incendio de la municipalidad de San Martín de Porres en junio de 1980, constituyó apenas el inicio del accionar subversivo en la Zona Norte. El 23 de octubre de ese año una turba de sujetos provoca el incendio del municipio de Comas bajo una granizada de bombas molotov. Posteriormente, fueron atacados los locales municipales de Comas y el Rímac (1983), la municipalidad de San Martín de Porres nuevamente (1984), el municipio de Carmen de la Legua (1989) y la municipalidad de Carabaylo (1991), además del atentado realizado por el MRTA a la municipalidad de San Martín de Porres (1990).

En Independencia también ocurrieron situaciones que afectaron la posición de las autoridades de izquierda. En dicho distrito, durante la gestión de Esther Moreno, alcaldesa de IU, fue asesinado el gobernador aprista Pedro Moreno el 19 de febrero de 1987. Dicho asesinato exacerbó la conflictividad existente en el distrito, que se remontaba a los litigios por la lotización en el asentamiento humano «Víctor Raúl Haya de la Torre», de fuerte presencia aprista. Las disputas internas desencadenaron que, a partir de 1986, cuando Izquierda Unida logró la alcaldía de Independencia, se manifestase una fuerte tensión entre apristas e izquierdistas sobre los lotes, polarizándose las opciones alrededor de la propuesta del Ministerio de la Vivienda, promovido por el gobierno de Alan García, y la propuesta del municipio aprobada por la población.

También se registra que el 28 de setiembre de 1989 un grupo de desconocidos intentó secuestrar a Humberto Paredes, militante del PUM y candidato de IU a la alcaldía de Comas, presumiéndose que hayan sido paramilitares. En 1990 el PCP-SL asesinó a José Gálvez, candidato del FREDEMO, en aquel entonces director del colegio Carlos Wiesse de Comas. Vemos entonces que el PCP-SL aparece compitiendo con la izquierda y el APRA por el control de los sectores populares, pero utiliza métodos violentos que obligan al repliegue de los grupos políticos.

1.5.7.2.3. Ataques y copamiento de dirigencias barriales

Desde la segunda mitad de la década de 1980, El PCP-SL cambió su estrategia en la ciudad, pasando de los sabotajes a los asesinatos selectivos, y de la infiltración en organizaciones y movimientos sindicales y barriales a una mayor presión por el copamiento de las dirigencias. En efecto, durante el gobierno aprista el accionar subversivo se orientó contra los locales del APRA, los trabajadores del PAIT (programa de empleo temporal creado por el gobierno) y los dirigentes apristas de las organizaciones barriales, situación que se intensificó tras la matanza de los penales de 1986. A fines de 1985, subversivos del PCP-SL dinamitaron los locales PAP de Comas y San Martín de Porres, y en 1987 atacaron el local del PAIT de San Martín de Porres. En noviembre del mismo año, es asesinado Samuel Colca, un dirigente aprista del pueblo joven Micaela Bastidas. Pero los senderistas no sólo se concentraron en atacar a dirigentes ligados al partido de gobierno, pues durante 1989, asesinaron a dos dirigentes de IU, Elías Corcuera, dirigente sindical en San Martín de Porres y Raúl Santiago, dirigente de Independencia.

En el distrito de Carabayllo, desde mediados de los 80's, comienzan a llegar a la zona diversas personas desplazadas por la violencia en el campo, que se instalan en las casas de sus familiares, o comienzan a invadir terrenos o a alquilar las zonas rurales. En el Frente de Defensa de Carabayllo, que empezó a funcionar a partir de 1987, y en donde se formaba políticamente a la población hubo personas ligadas tanto al PCP-SL como al MRTA, quienes repartían volantes y daban discursos.

La estrategia subversiva en Carabayllo estuvo dirigida a convertir las dirigencias barriales en portavoces de los subversivos, buscando para ello amedrentar a otros dirigentes. Los subversivos llegaron a organizar células en El Progreso y Raúl Porras, manifestándose en las organizaciones vecinales como dirigentes radicales. En esta situación, la gente distinguía su afiliación ideológica por el lenguaje que usaban, pues no se manifestaban públicamente como miembros del PCP-SL. Sin embargo, en Comas e Independencia la presencia subversiva fue más fuerte, tal es así que casi en cada reunión se informaba de nuevas actividades.

En los 90's se registra un ataque del PCP-SL al local de Cambio 90 en Comas, así como violentos enfrentamientos con armas de fuego entre grupos de pobladores durante las últimas invasiones, unidas al creciente asesinato de policías. Con esto se incrementaba la necesidad de orden y la sensación de inseguridad de las poblaciones de la zona. Si bien desde 1987 el PCP-SL buscó con mayor intensidad lograr el control de las barriadas, fue tras el «fujishock» de agosto de 1990 que estableció una tensa disputa por copar las dirigencias de los barrios populares de Boca Negra y Los Olivos. En este contexto, el PCP-SL asesinó a diversos dirigentes populares, como la coordinadora del Programa del vaso de Leche en Néstor Gambeta, Callao. Como dijimos en el capítulo introductorio, el PCP-SL estimaba que los asesinatos en la capital generaban amplia resonancia, pero la situación empeoró en 1991, cuando las amenazas se hicieron extensivas a pobladores sin cargos dirigenciales, por negarse a acatar directivas.

1.5.7.2.4. Características del accionar subversivo

Para entender las características del accionar subversivo, hay que destacar que no se generó una confrontación abierta entre los dirigentes de izquierda y el PCP-SL en la zona. Además, el PCP-SL tuvo una marcada predominancia sobre el MRTA, manifiesta principalmente con la organización de un aparato militar y político operando en diferentes distritos del espacio metropolitano.

La construcción de la presencia subversiva en la Zona Norte fue lenta pero efectiva a mediano plazo. En lo que respecta a Carabayllo, los pobladores manifiestan que en la dirigencia barrial del asentamiento humano Héroes de la Guerra del Pacífico hubo miembros senderistas, que si bien en 1991 ya no ocupaban la dirigencia continuaban residiendo en esa zona. En los 90's, con la captura de dirigentes tanto del PCP-SL como del MRTA, se percibió que las zonas de San Martín de Porres, Rímac, Comas y El Progreso, eran «dormitorios» para los cuadros medios de

Socorro Popular o el MRDP. A partir de la lectura de El Diario de 1988 a 1991, el Informativo Desco N° 6 señala que los asentamientos humanos más mencionados del Cono Norte corresponden a San Juan Bautista III (Mz. «D») en Comas, Jesús Alberto Páez, Año Nuevo, Carmen Alto, II, III, IV y V zonas de Collique, Los Olivos Pro, III sector de El Progreso de Carabayllo, Raúl Porras Barrenechea, La Flor; Néstor Gambeta, Bocanegra en el Callao; Oasis, las Esteritas I, Los Rosales en Ancón y Laderas del Chillón. Estos eran los puntos de residencia de los senderistas, mientras que otros sectores de infiltración senderista fueron el AH Cerro Camote, Villa Sol, y los sectores colindantes con la Avenida Universitaria.

1.5.7.2.5. Aparato partidario del PCP-SL

Según el Informativo DESCO N° 7, en una casa de Comas se habrían inhumado los restos de Augusta La Torre («camarada Norah»), esposa de Abimael Guzmán, aunque no se precisan fechas. Por otra parte, la captura de un comando de aniquilamiento en el Callao, en octubre de 1991, permitió acceder a una zonificación de los comandos de aniquilamiento senderista. Cada zona tenía su comando propio, con miembros que normalmente vivían en otras zonas. En la Zona Norte senderista, excepcionalmente, operaron dos comandos de aniquilamiento independientes, uno de los cuales era precisamente el que residía en la casa intervenida en el Callao.

De acuerdo a Benedicto Jiménez (2002), en lo que respecta al accionar del Comité Metropolitano en la zona, el PCP-SL conformó un destacamento conocido como «Comité Zonal Norte», que abarcaba los distritos de Comas, Carabayllo, Los Olivos, etc. Para inicios de 1992, la célula de dirección de esta zonal fue recompuesta en una reunión en Zárate a cargo de Juan Francisco Tulich Morales (mando político) y Remigio Mercado Sangama (mando militar). La célula de dirección de la sub zonal de Comas sólo llegó a funcionar un mes, por problemas de seguridad. Sus miembros conformaron otra célula de dirección, centrando sus actividades proselitistas en el asentamiento humano Laura Caller Iberico, en Los Olivos. También realizaron incursiones dentro de la Universidad Nacional de Ingeniería, en campañas de propaganda y agitación con el propósito de captar nuevos adeptos. En junio de 1992, la zonal norte entró nuevamente en reorganización, suprimiendo el cargo de mando militar, y organizando dos destacamentos y una milicia.

Muy distinto fue el accionar de Socorro Popular, aunque finalmente tuvo un destino idéntico. Con respecto a la Zona Norte de Lima, sólo en el Callao llegaron a operar 4 células obreras, 2 Movimientos Clasistas Barriales, un Movimiento Juvenil y un Movimiento Intelectual Popular, a cargo de un profesor en Ventanilla. El responsable de la sección de Obreros, Barrios y Trabajadores (OBT) y miembro de la célula de dirección de Socorro Popular, Carlos Ríos Fernández, mando político de todo OBT, fue detenido por la Marina el 22 de julio de 1992, en el asentamiento humano Bocanegra.

Por su parte, el «Ejército Guerrillero Popular» (EGP) concentró su accionar en la Zona Norte de Lima, en la Panamericana Norte, avenida Túpac Amaru, Los Olivos, etc. Los cuadros que conformaban sus destacamentos eran en su mayoría estudiantes universitarios, pero también habían obreros, desocupados, canillitas, etc. Estos últimos habían sido captados por los mismos estudiantes o por los médicos que eran parte de Apoyo Salud de Socorro Popular, para formar el aparato militar. Las acciones de esta fuerza militar abarcaban desde la propaganda y la agitación armada, hasta los asesinatos selectivos, estando siempre vinculados a la rama de medicina.

En 1993, cuando se detuvo al mando político del EGP de la Zona Norte, se tuvo conocimiento de que en dicha zona actuaban tres destacamentos del Departamento de Apoyo, en la Avenida Túpac Amaru, Panamericana Norte y Avenida Universitaria, con un total de 14 combatientes, 7 milicias populares permanentes (en el AH Barrio Nuevo, La Balanza en Comas, Cerro San Albino en Independencia, Km. 24 de la Av. Túpac Amaru, AH Ramón Castilla, Puente Piedra y Ancón) y 12 milicias populares transitorias o «en forja», lo que hacía un total de 44 integrantes.

1.5.7.2.6. Incursión de las fuerzas del orden y los grupos paramilitares

En el difícil escenario abierto por la guerra interna, las dirigencias barriales de los sectores populares se hallaron entrapadas entre la acción subversiva, la represión de las fuerzas del orden y los operativos de grupos paramilitares, cuyas acciones comenzaron a manifestarse con mayor frecuencia desde 1990. En el caso de Carabaylo, por ejemplo, se efectuaron constantes rastrellajes y operativos policiales en las zonas altas, donde se presumía de la existencia de elementos subversivos entre la población. En diciembre de 1991, en dos operativos de la Marina y uno de las fuerzas policiales, se capturaron 20 presuntos senderistas en la zona ubicada entre el aeropuerto internacional y el distrito de Ventanilla, en el Callao. En respuesta a la presencia militar y policial, en enero de 1992 los senderistas lanzaron un explosivo en una casa que la policía iba a usar para repartir alimentos entre la población, y también destruyeron un reservorio de lona para agua en un pueblo joven de Ventanilla, mientras que a fines de mes un dirigente del asentamiento Fraternidad quedó herido, tras un segundo atentado senderista contra su vida.

Es importante destacar que uno de los principales «depósitos de salud» del PCP- SL fue intervenido en la Asociación de Vivienda 2 de agosto, en la operación «Hipócrates» de la Dircote, el 26 de febrero de 1992, con el cual capturaron a diversos miembros de la célula de dirección de salud del PCP-SL, muchos de ellos estudiantes de San Marcos, capturas que fueron posibles a partir de la detención de Tito Valle Travesano, Yovanka Pardavé y Víctor Zavala Cataño, integrantes de la célula de dirección de Socorro Popular del Perú, el 22 de junio de 1991.

Los 90's, como vimos en capítulos anteriores, también fueron el escenario en que reaparecieron los grupos paramilitares en el país, responsables en la Zona Norte de cuatro

asesinatos en Carabayllo en noviembre de 1991 y otros cuatro en Comas el 6 de febrero de 1992. Es probable que el asesinato de Pedro Huilca, en diciembre de 1992, fuera ejecutado por miembros del grupo Colina. En esos días la violencia parecía declinar en lo que respecta a la cantidad de atentados, pero se intensificaban las víctimas, en medio de condiciones que muchos denunciaron como el traslado de «la guerra sucia» del campo a la ciudad, particularmente a los conos populares, con una creciente militarización del conflicto.

Como vemos, el trabajo efectivo de inteligencia de la policía no descartaba el accionar indiscriminado de las FFAA ni las operaciones selectivas del grupo Colina, pero a pesar de esta respuesta contrainsurgente, en febrero de 1992 Lima Metropolitana concentraba el 65% de las acciones subversivas en todo el país, de las cuales casi el 28% se realizaron en la Zona Norte, es decir, el segundo lugar en intensidad de actos terroristas, en momentos en que el PCP-SL convocaba a un Paro Armado para el 14 de febrero, día en que se llevaron a cabo 25 atentados, siendo el más espectacular la voladura de un camión portatropa de la policía en Comas.

1.5.7.2.7. La población frente a la intensificación de la violencia

Frente a la violencia surgieron diferentes respuestas por parte de los partidos, la Iglesia, las ONG's locales y la población. Los comités locales partidarios se manifestaron en los denominados Foros por la Vida y la Paz. La ONG CIPEP, que operaba en Independencia y Carabayllo, organizó charlas sobre la violencia conjuntamente con las parroquias y el Foro Perú Vida y Paz, en 1987. Para entonces, el recrudecimiento de la violencia también intensificó el temor en la población, tal es así que durante el Segundo Foro organizado en 1990 con el apoyo de la Conferencia Episcopal, la concurrencia fue muy limitada.

El 1 de diciembre de 1991 varias organizaciones barriales de los distritos del Cono Norte realizaron una Marcha por la paz, en rechazo de la violencia, en momentos en que el gobierno de Fujimori establecía duras medidas represivas contra la población con «rastrillajes» y operativos policiales selectivos. Fueron momentos de suma tensión para los dirigentes barriales, así como para los alcaldes distritales, ubicados en una difícil situación, entre la presión de los grupos subversivos, la necesidad de autodefensa, y una difícil convivencia con las fuerzas del orden. Al reducirse la presencia subversiva en la zona se establecieron relaciones clientelares entre los dirigentes y el fujimorismo, mientras que los partidos de izquierda perdieron influencia en la zona, y los programas de proyección social de la Iglesia no alcanzaron capacidad suficiente para abarcar toda la comunidad. La ONG Alternativa promovió Comités de Derechos Humanos en Condevilla, Naranjal y el asentamiento humano Bocanegra en el Callao. Dichas actividades buscaban reforzar las organizaciones concebidas como mecanismos de defensa frente a la violencia. También se organizaron eventos y denuncias frente a las levas forzosas, pues se generaba el temor de la población, en especial de los pobladores de Bocanegra, quienes rechazaron tanto las medidas de los

grupos subversivos como de las fuerzas del orden, aunque finalmente el grupo tuvo que retirarse frente a las crecientes amenazas contra los dirigentes de la directiva central.

Las propuestas de paz estaban orientadas a la mejora de las condiciones de vida y a la mayor participación de los jóvenes. En Los Olivos, la Pastoral Juvenil tuvo en esa medida la función de muro de contención frente al radicalismo de algunos jóvenes que acusaban a las instituciones de derechos humanos de servir de «colchón» al gobierno.

Por el lado de los dirigentes de organismos de supervivencia, no hubo en general una amenaza directa contra sus actividades, pero en los 90's la Presidenta de la Comisión Nacional de Comedores, Rosa Landaberry, se vio obligada a salir del país, en la misma época en que se capturaron diversos líderes senderistas, y se desarticuló el Frente de Defensa de Carabayllo.

Antes del autogolpe del 5 de abril de 1992, apareció un pronunciamiento de los alcaldes de Carabayllo, Ventanilla, San Juan de Lurigancho y Villa El Salvador. En dicho pronunciamiento plantearon la formación de «Consejos distritales de pacificación y desarrollo con mando de poder civil».

1.5.8. Zona IV: Villa El Salvador

Este capítulo resume la investigación realizada por la CVR en Villa El Salvador (VES), incluida en los Estudios en Profundidad (Ver Estudio VES de la CVR). La historia reciente de VES representa uno de los capítulos importantes del conflicto armado interno en el Perú durante 1980 y 2000 pues se trata de un distrito especialmente reconocido por su nivel organizativo, su capacidad de autogestión y la participación de sus pobladores en la toma de decisiones locales. En este contexto, VES representó un espacio particular disputado por los grupos alzados en armas y los partidos de Izquierda Unida (IU). Para las fuerzas del orden, VES fue tempranamente designado como «zona roja», en consecuencia los pobladores soportaron operativos de rastillaje que frecuentemente significaron la detención arbitraria de cientos de personas.

1.5.8.1. Datos generales

VES fue fundada en 1971, como respuesta del gobierno militar reformista de Juan Velasco Alvarado (1968-1975) a una invasión de tierras organizada por migrantes recientes y pobladores de los tugurios y callejones de Lima. La invasión original de terrenos estatales fue organizada por unas doscientas familias, pero en sólo unos días, unas nueve mil familias más se plegaron a la invasión. Miles de familias recibieron tierras del gobierno en este nuevo asentamiento, que se convertiría en la vitrina urbana de la «revolución» velasquista. Los funcionarios del Estado tuvieron la tarea de transformar esta invasión en la primera comunidad urbana planificada en el Perú. Mientras los planificadores estatales supervisaban las iniciativas comunales a través del Sistema Nacional de

Movilización Social-SINAMOS, el modelo autogestionario promovido por el régimen velasquista ayudó a nutrir una red dinámica de organizaciones sociales que buscaron movilizar los esfuerzos colectivos para así mejorar la comunidad local. Se creó un organismo dirigencial central, llamado Comunidad Urbana Autogestionaria de VES (CUAVES), que supervisaría el desarrollo de la comunidad y la representaría ante el gobierno y los demás agencias externas. La Asamblea General de la CUAVES estaba conformada por los sectores de los grupos residenciales, entre los cuales se elegía un consejo ejecutivo conformado por diez dirigentes.

El derrocamiento de Velasco marcó un viraje del gobierno militar, y significó para VES la pérdida de apoyo y recursos estatales. Durante este período, VES dependía administrativamente del distrito de Villa María del Triunfo, pero no recibió los recursos o el apoyo necesario para resolver sus problemas elementales. Para llenar el vacío dejado por la ausencia de la ayuda estatal y en respuesta a la crisis económica las mujeres, por ejemplo, comenzaron a organizarse después de 1979 para satisfacer las necesidades alimenticias de sus familias a través de los comedores populares, mientras que la CUAVES, perdió su principal fuente de recursos y muchos de sus proyectos comunales se desmoronaron, como fue el caso, por ejemplo, de la caja comunal. A ello se suman las disputas faccionales entre los partidos de izquierda al interior de la CUAVES. En el contexto de la retirada del apoyo estatal, el descuido municipal por parte de las autoridades de Villa María del Triunfo y la crisis de la CUAVES, surgió un movimiento amplio por convertir a VES como distrito municipal independiente, lo cual fue aprobado por el Congreso Nacional en 1983.

1.5.8.2. Historia de la violencia

1.5.8.2.1. El inicio de la violencia: 1986-1988

El conflicto más significativo se origina en la competencia política entre IU y el APRA, algo que sucedió a lo largo y ancho del país a mediados de los años ochenta. La competencia y conflictividad se acrecentó luego de que Alan García fuese elegido presidente en 1985. Mediante programas sociales como el Programa de Ayuda al Ingreso Temporal (PAIT) y Programa de Ayuda Directa (PAD), el gobierno buscó generar simpatía para el APRA, llegando según algunos observadores a obligar a los beneficiarios a carnetizarse como miembros del APRA para seguir recibiendo sus beneficios. Aún así, la IU dominó la política local en VES durante los años ochenta, estableciéndose una suerte de hegemonía, pero una hegemonía en disputa.

Fue en este contexto que el PCP-SL y el MRTA comenzaron a actuar más intensamente en el distrito. El PCP-SL manipuló rivalidades con astucia, forjando alianzas con algunos sectores dentro de la CUAVES que veían a los otros sectores vinculados al municipio con mucho recelo. Establecer una alianza con los «cuavistas» (a pesar de sus simpatías con el MRTA, otro grupo que el PCP-SL repudiaba por su «revisiónismo») contra un enemigo común -los «revisionistas» de la

municipalidad- permitiría al PCP-SL «agudizar» las «contradicciones principales» dentro del distrito, deslegimitar a IU y destruir el modelo de ciudad alternativa que Villa representaba para la izquierda legal peruana. Michel Azcueta de IU, alcalde elegido en VES en 1983 y 1986, lideró la campaña para establecer a VES como distrito independiente en 1983. La hegemonía de IU no terminó con el segundo periodo de Azcueta. IU ganó fácilmente las elecciones municipales en el distrito en 1989. Johny Rodríguez fue elegido alcalde y María Elena Moyano -ex-presidenta de la Federación de Mujeres- teniente alcaldesa. Para esa época, la IU se había dividido, creando niveles adicionales de tensiones y conflictos en el distrito. A su vez, la situación a nivel nacional se había deteriorado seriamente. La hiperinflación de 1988-90 diezmó los presupuestos estatales y municipales. VES seguía creciendo, pero la organización social ya no era suficiente para resolver los problemas de los habitantes de las nuevas invasiones en la periferia del distrito, y el gobierno municipal carecía de recursos para responder a las demandas de infraestructura básica en esas zonas.

El debilitamiento de los mecanismos tradicionales de representación de intereses como los partidos políticos y los sindicatos significó que los sectores con menos recursos tuvieran menos posibilidades de encontrar solución a sus problemas básicos; si agregamos a ello el debilitamiento de la autoridad del Estado y su repliegue en importantes zonas del país, podremos entender como los grupos subversivos, en especial el PCP-SL, lograron actuar en VES, contra la predicción de muchos.

La violencia política también jugó un papel importantísimo en ese sentido, ya que el miedo y el terror contribuyeron a disuadir a los pobladores de participar en la política y/o en las organizaciones sociales. Por ello, es importante señalar el rol del Estado: al no poder asegurar condiciones mínimas de seguridad ciudadana, el Estado tiene una responsabilidad particular en el desarrollo de ese proceso. Las condiciones estructurales indudablemente favorecieron el ingreso del PCP-SL a la capital y su pase al llamado «equilibrio estratégico». Por su parte, el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) igualmente tuvo presencia en VES. Sin embargo, su accionar se distinguía del PCP-SL tanto por su forma de relacionarse con las organizaciones populares y la izquierda electoral, como por su metodología de guerra. En primer lugar, el MRTA concebía su accionar como el brazo armado de la izquierda electoral, su defensor y representante, aunque la izquierda no hubiera apoyado tal tesis, y por lo tanto buscaba generar simpatía entre el sector organizado de la población. En segundo lugar, los métodos del MRTA (reparto de víveres, actos de propaganda armada, etc.) no incluían el terror de asesinatos y atentados contra la infraestructura pública ni el acoso a los dirigentes y las organizaciones, aspectos centrales de la estrategia senderista

Mientras el accionar del PCP-SL se concentró en las zonas rurales del país durante buena parte de los años 80, hacia finales de esa década la organización maoísta realizó un viraje en su estrategia, incorporando a las ciudades —principalmente Lima— como un complemento a su

estrategia rural. Según documentos del PCP, la «guerra popular prolongada» en el campo se había desarrollado a tal punto que ya era hora de preparar el terreno para la insurrección urbana, que los llevaría a la toma del poder. Como hemos visto en capítulos anteriores, un elemento clave sería controlar los enormes «pueblos jóvenes» que rodean la capital como un «cinturón de hierro» y albergan casi la mitad de su población.

El PCP-SL comenzó su actuación en VES a inicios de los años ochenta de manera clandestina y subterránea. En efecto, registramos un número relativamente pequeño de incursiones armadas en VES entre 1981 y 1986, dirigidas contra entidades gubernamentales, la única comisaría del distrito, los bancos y las torres de electricidad. El PCP-SL realizó ocasionales actividades de agitación y propaganda, como la iluminación de inmensas fogatas con el símbolo de la hoz y el martillo en los cerros que rodean al distrito. Reproduciendo su estrategia de circuito educativo, un pequeño núcleo de estudiantes sanmarquinos del PCP-SL organizó grupos de estudio en VES para reclutar nuevos militantes. Desde los colegios, el PCP-SL buscaba ganar jóvenes estudiantes a la causa revolucionaria del PCP-SL. Maestros como Nelly Evans, por ejemplo, quien enseñó en el Colegio Fe y Alegría a finales de los años setenta y comienzos de los ochenta, fueron ganados a la causa senderista.

De 1987 hacia adelante, hubo ciertas evidencias de la intención senderista de establecer una presencia más orgánica en VES. Mientras que las actividades de sabotaje proseguían, había señales de un activismo político de base. Por ejemplo, se crearon grupos de estudio y asociaciones culturales que servían como para reclutar militantes. También se establecieron academias técnicas, un lugar propicio donde reclutar a jóvenes recién egresados del colegio que tenían pocas posibilidades de ingresar a la universidad y buscaban prepararse para un mercado laboral poco prometedor.

A partir de 1988, las actividades senderistas de agitación y propaganda se hicieron más visibles. Por ejemplo, pequeños contingentes senderistas participaron en actividades y marchas de protesta organizadas por grupos vinculados a la IU en VES. Tales actividades y movilizaciones fueron dirigidas a cuestionar las medidas económicas del gobierno o violaciones de los derechos humanos por las fuerzas de seguridad.

1.5.8.2.2. Todos los actores, la mayor resonancia posible: 1989 –1992

En el marco del anuncio de la llegada al «equilibrio estratégico» en el año 1989, la estrategia del PCP-SL en VES cambió de perfil buscando disputar la hegemonía de la izquierda en el distrito y «desenmascarando» así la supuesta inutilidad de su opción pacífica de cambio social. Así comenzó una frontal confrontación con la izquierda legal en el distrito buscando desprestigiar su liderazgo político y social, amenazando y en algunos casos asesinando también a quienes se opusieron a su «guerra popular».

En ese contexto surgieron una serie de conflictos con las estructuras de poder local que la izquierda dominaba -como el municipio, la CUAVES y FEPOMUVES- para demostrar la supuesta inviabilidad del modelo autogestionario y de cambio social por la vía pacífica.

A su vez, al radicalizar y exacerbar el conflicto social en el distrito, el PCP-SL también buscó provocar la represión militar -una estrategia que había seguido en el campo y en otras zonas de la capital como Raucana- creyendo que la polarización obligaría a la población a tomar posiciones y que la población se uniría a la guerra popular. Sin embargo, el grueso de la población miraba al PCP-SL a la distancia y con cierto temor. El PCP-SL buscó imponer sus propios métodos y liderazgo sin tener una relación dialéctica con la población local más allá de lo que concebía necesario para avanzar en la «guerra popular». El autoritarismo extremo del comportamiento senderista, al fin y al cabo, minó su posibilidad de obtener apoyo popular masivo.

A lo largo de 1989 y 1990 el PCP-SL incrementó su accionar en el distrito con actos de sabotaje y de propaganda, como quema de buses, atentados contra infraestructura de luz y agua, la comisaría y el local del partido de gobierno, Cambio 90. También asaltó hospitales en el distrito, presumiblemente para llevar medicinas y otros bienes para atender a sus heridos. Otras acciones se puedan definir como actos de agitación y propaganda, como la distribución de volantes en mercados y colegios, la intercepción de camiones y la repartición de los comestibles que llevaban, como sucedió el 24 de enero de 1991 cuando una columna del PCP-SL secuestró un camión cargado con más de 300 cajas de aceite vegetal que repartieron entre las amas de casa que realizaban compras en un mercado en VES. Exactamente lo mismo que el MRTA hacía. En otra ocasión, el 10 de abril de 1991, se registró un intento de parte del PCP-SL de incitar a la población a saquear un camión que distribuía bebidas gaseosas.

En 1991 los dirigentes del distrito comprueban que el PCP-SL tenía claras intenciones políticas de descabezar las organizaciones sociales más importantes y destruir el proyecto de VES, pues a mediados de ese año se puede detectar una escalada de violencia en el marco de la estrategia de crear vacío de poder intimidando y eliminando a las autoridades y líderes locales. El primer acto en ese sentido se registra el 23 de junio de 1991, cuando el PCP-SL asesinó a Alejandro Magno Gómez, prefecto del distrito y miembro de Cambio 90, el partido de gobierno. En septiembre de 1991, una bomba explotó y destrozó uno de los centros de acopio de la FEPOMUVES, donde la organización almacenaba alimentos que distribuían a los comedores populares. María Elena Moyano acusó al PCP-SL del atentado y se convirtió en una crítica abierta e implacable de la organización maoísta.

A finales de 1991, el alcalde Johny Rodríguez, intentó crear un frente amplio contra el PCP-SL en el distrito desde el municipio promoviendo la formación de la Mesa por la Paz y el Desarrollo, que pretendió ser un espacio de concertación que unía a las organizaciones populares, grupos de derechos humanos, la Iglesia Católica, y el gobierno municipal. El objetivo de la Mesa por la Paz era desarrollar estrategias alternativas para responder a los problemas sociales de Villa y

detener la creciente influencia senderista en la comunidad. Las estrategias de la Mesa por la Paz no fueron suficientes para enfrentar un enemigo dispuesto a utilizar la violencia para conseguir sus objetivos.

A inicios de 1992, se registran una serie de atentados, asesinatos e intentos de asesinato, cometidos por el PCP-SL. El 13 de enero de 1992, una columna de once senderistas atacó a tres suboficiales de la Policía General que hacían vigilancia cerca al mercado central de VES. Un policía murió en el atentado, y el hecho infundió mucho temor en la población. El 13 de enero de 1992, un obrero del primer sector fue baleado en la puerta de su domicilio. El 10 de febrero, un anciano vigilante fue asesinado y un cartel fue colocado sobre su cuerpo: «Así mueren los soplones», con el símbolo de la hoz y el martillo. Dos días después, Juan Huamán Valle, un dirigente vecinal de 52 años, fue baleado por supuestos senderistas en la puerta de su casa. La escalada de violencia política era cada vez más evidente.

Los esfuerzos nacientes por organizar rondas se desarmaron luego de que el PCP-SL visitara a los organizadores, casa por casa, amenazándoles y advirtiéndoles que desistieran de organizar rondas, pues ellos se encargarían de los problemas de delincuencia y droga.

1.5.8.2.2.1. La lucha por el Parque Industrial

El 9 de febrero de 1992 marcó un momento decisivo en VES. Se llevaron acabo elecciones en la APEMIVES, y un microempresario de la zona, Máximo Huarcaya, fue elegido presidente de la asociación, supuestamente con el respaldo del PCP-SL. La APEMIVES era una de las instituciones que conformaban la Autoridad Autónoma (AA), el cuerpo rector del Parque Industrial de VES. Los otros actores que participaban en la AA eran el alcalde distrital y un representante del gobierno central, de la industria privada, y el presidente de la CUAVES.

Huarcaya lideró un grupo de pequeños empresarios que exigían que ningún empresario fuese expulsado del Parque Industrial y que el control de los recursos de ese Parque fuera transferido exclusivamente a la APEMIVES.

Cuatro días después de la victoria de Huarcaya hubo una reunión de emergencia en el Parque Industrial para discutir la situación. María Elena Moyano exigió a Huarcaya y a Filadelfo Roa, el presidente de la CUAVES y quien apoyó a la candidatura de Huarcaya, que firmaran un documento de deslinde con el PCP-SL, a lo cual ambos se rehusaron. Según Huarcaya, había consultado con las bases de la APEMIVES, quienes votaron en contra de firmar el documento.

Pero para los que estaban en el municipio, la relación con el PCP-SL era clara. María Elena Moyano decidió que el momento había llegado para desafiar al PCP-SL de manera directa. El PCP-SL había decretado un paro armado en Lima para el día siguiente, el 14 de febrero; Moyano planteó que Villa y sus organizaciones debían protestar contra el paro en una manifestación pública, la «Marcha por la Paz». La marcha se realizó, pero sólo participaron unas 50 personas, portando

banderas blancas en símbolo de la paz. Ese mismo día, el 14 de febrero de 1992, un paquete de 500 gramos de dinamita fue colocado en la puerta de la casa del ex-alcalde del distrito, Michel Azcueta. Al día siguiente, el 15 de febrero de 1992, un comando de aniquilamiento senderista asesinó a María Elena Moyano a balazos en una pollada en el primer sector del distrito. Después de matarla, llevaron su cuerpo a la puerta del local comunal y le colocaron una carga explosiva de unos cinco kilos de dinamita que destrozó el cuerpo de la dirigente.

En los días siguientes, volantes del PCP-SL circularon por todo el distrito reivindicando la autoría del atentado y justificando el asesinato de Moyano por sus supuestas fechorías: corrupción, favoritismo, «soplona». Dirigentas como María Elena Moyano se encontraron solas frente a un grupo dispuesto a utilizar la violencia en contra de quienes consideraban sus enemigos.

Hubo una procesión funeraria masiva para María Elena Moyano que fue señalada por muchos como muestra del rechazo popular al PCP-SL. Ciertamente numerosos dirigentes indignados por el brutal asesinato de Moyano participaron en el acto a pesar del clima de miedo y terror que acrecentaba sobre VES. Sin embargo, numerosos observadores comentaron que la participación de dirigentes y pobladores de VES fue reducida, y que la mayoría de los que participaron en el evento llegaron de fuera de VES, incluyendo el ex-presidente Fernando Belaunde Terry.

Los testimonios recogidos sugieren que había dos interpretaciones y reacciones en ese momento que no son necesariamente contradictorias, sino que muestran la complejidad de la situación. Por un lado, el asesinato de María Elena Moyano generó rechazo a nivel de los dirigentes nacionales y locales que ya habían definido una posición en contra del PCP-SL y sus actos violentos. También hizo que otros dirigentes y pobladores que vieron al PCP-SL con cierta simpatía cambiaran de opinión.

Pero, igualmente, ciertos sectores aprobaron el «castigo» que había recibido a manos del PCP-SL. Las acusaciones de favoritismo político, de corrupción, y de haberse alejado de las bases fueron citados como elementos que «justificaron» el atentado en contra de ella.

El objetivo principal del PCP-SL al asesinar a Moyano, había sido logrado: generar miedo e inhibir cualquier acto de resistencia en VES (y en el país en general). Las dirigentas de FEPOMUVES se replegaron por presión de sus familias y por miedo de ser la próxima víctima. Y frente a ese repliegue, dirigentes aparentemente cercanos al PCP-SL tomaron las riendas de la organización femenina.

Poco después de la muerte de María Elena Moyano, la presidenta de la FEPOMUVES, Ester Flores, sufrió un colapso nervioso y salió del país. Según ella, parte de su decisión de retirarse del país tuvo que ver con la forma en que los medios de comunicación buscaron levantarle a ella luego de la desaparición de María Elena Moyano para señalarla como la que seguiría su camino de liderar la resistencia al PCP-SL. Algunas dirigentas renunciaron a sus cargos, mientras otras

seguían trabajando pero evitaban todo discurso político. En ese sentido, el PCP-SL había logrado un objetivo clave para sus fines: la desarticulación de la FEPOMUVES.

La muerte de María Elena Moyano tuvo fuertes repercusiones en todo el distrito. La Mesa por la Paz y Desarrollo se desarticuló, aunque Johny Rodríguez y sus aliados cercanos continuaron denunciando al PCP-SL y a los grupos dentro de VES que supuestamente se habían aliado con ellos. Criticaban en particular a la dirigencia de la CUAVES por su «complicidad» con el PCP-SL y por su negativa en denunciar al PCP-SL por el asesinato de María Elena Moyano, mostrando así su desacuerdo con lo que consideraban una toma de la CUAVES por los sectores radicalizados en alianza con el PCP-SL y el MRTA.

Esta alianza táctica se hizo evidente poco después de la muerte de Moyano, en marzo de 1992, cuando el comité ejecutivo de la CUAVES y el «Comité de Lucha Distrital» —un grupo de fachada senderista— movilizó a cientos de personas para que protestaran exigiendo la destitución del Alcalde Johny Rodríguez «por promover la militarización de VES».

1.5.8.2.2.2. La VI Convención de la CUAVES

El nivel de influencia que había logrado tener el PCP-SL en VES era cada vez más evidente, pero el control que ejerció sobre la VI Convención de la CUAVES, realizada a finales de agosto de 1992, sorprendió a todos los observadores. La influencia del PCP-SL en la CUAVES ya era evidente en 1991, cuando un sector de los llamados «cuavistas» —mucho de ellos simpatizantes del MRTA— forjaron una alianza táctica con los dirigentes simpatizantes con el PCP-SL para remover al secretario general de la organización, Roque Quispe. En esta reunión, los grupos radicales —los «cuavistas», con el apoyo implícito de los dirigentes del MRTA y del PCP-SL— presentaron una moción afirmando que dada la situación económica el municipio no debería cobrar el impuesto, propuesta que fue aprobada. Una semana después mediante votación se destituyó a Quispe de su cargo, y Roa asumió el cargo de secretario general de la CUAVES.

Como vemos, al igual que en todas las regiones del país, la violencia política se impuso en VES sobre conflictos ya existentes y algunos grupos aprovecharon el contexto de miedo y consternación para avanzar sus intereses políticos y personales, estableciendo alianzas con el MRTA y con el PCP-SL.

La Sexta Convención de la CUAVES, llevada a cabo en agosto de 1992, fue esencialmente copada por el PCP-SL, tal como se demuestra al leer el documento final de esa reunión. El documento original incluía una lista de nombres de varios dirigentes a ser «liquidados», pero esta lista no fue incluida en el documento final. De hecho la Convención carecía de legitimidad y para muchos en VES la CUAVES dejó de tener resonancia política, aunque seguía siendo una referencia simbólicamente significativa para el distrito. Por ello el copamiento de la CUAVES y de la sexta

convención era una victoria simbólica para el PCP-SL ya que demostraba que habían logrado cierto nivel de influencia dentro de VES e iba extendiendo su influencia en las barriadas de Lima.

Concluida la sexta convención, el gobierno municipal denunció públicamente a la dirigencia de la CUAVES por estar coludida con el PCP-SL, y rehusó reconocer la legitimidad de la VI Convención y a la dirigencia de la CUAVES. A su vez, unos cuarenta miembros de base de la CUAVES emitieron un comunicado conjunto, señalando su negativa de reconocer la dirigencia de la organización comunal y su intención de renovar la organización desde las base. Esto en particular fue un acto de resistencia importante.

1.5.8.2.3. El declive de la violencia: 1993 - 2000

Los actos brutales del PCP-SL y su presencia creciente en organizaciones locales obligaron a las Fuerzas Armadas a establecer una Base Militar dentro de VES, cerca al Parque Zonal y Pachacamac, intentando aliarse con las autoridades del distrito y con ciertos dirigentes amenazados por el PCP-SL con el supuesto fin de protegerlos. Varios dirigentes señalan, sin embargo, que en lugar de sentirse protegidos, sentían temor de ser motivo de represalia de parte del PCP-SL. Esto evidencia la fuerte presencia que tuvo el PCP-SL en la zona y la sensación de absoluta desprotección que sentían los pobladores y sobre todo los dirigentes.

La presencia del Ejército en VES y el mayor despliegue de agentes de seguridad y de inteligencia, combinado con el avance senderista y el miedo que ello, y su violencia contra dirigentes de la zona, despertaba, infundió temor en la población. Muchos activistas de base comenzaron a alejarse de la vida pública y evitar participar en cualquier actividad que pudiera comprometerlos. A eso contribuyó también el autogolpe del 5 de abril de 1992, con el cual el presidente Alberto Fujimori cerró en Congreso y suspendió la Constitución con el apoyo de las fuerzas militares. Unos días después del autogolpe, el PCP-SL lanzó una fuerte ofensiva en Lima. Un potente ómnibus-bomba fue lanzado contra la fachada de la municipalidad de VES, destruyendo parte de ella, la comisaría, el Centro de Comunicación Popular y decenas de casas colindantes. Un oficial de la policía murió en el atentado y varios otros resultaron heridos.

El panorama cambió radicalmente en los meses que siguieron a la captura de Abimael Guzmán. Las fuerzas de seguridad toman la ofensiva, el PCP-SL se retrae y el distrito comienza a afrontar nuevos desafíos. En su lógica de «profundizar las contradicciones», el PCP-SL buscó agudizar los conflictos sociales y así generar mayor polarización para acelerar el supuesto triunfo de su «guerra popular», pero tanto la represión militar como el rechazo de la mayoría de la población a los asesinatos y actos violentos, así como la detención de su principal líder y la suscripción de los acuerdos de paz posteriores desbarataron el avance de sus propuestas.

1.5.9. Zona V: Centro de Lima Metropolitana

El centro de Lima es el centro del poder en el país, por ende blanco privilegiado para realizar atentados contra todo tipo de institución pública, empresas privadas, delegaciones internacionales, centros fabriles, etc. Los distritos céntricos de la metrópoli en la concepción senderista de la guerra popular fueron concebidos centralmente como caja de resonancia, tal como hemos señalado en el capítulo introductorio. Para poder precisar el impacto del conflicto armado interno en las diferentes realidades distritales existentes en esta zona durante el lapso 1980-2000, distinguimos 3 áreas o centros específicos: el centro antiguo, el centro industrial y el centro financiero-comercial.

1.5.9.1. Datos generales

La Zona Centro de Lima Metropolitana se ha configurado como espacio nuclear dentro de un modelo de modernización subdesarrollado, lo cual implicó que la concentración de población y actividades económicas, en un crecimiento urbano acelerado y desordenado, terminó desbordando cualquier gestión urbana eficiente. La crisis económica experimentada desde mediados de los 70's, se profundiza entre 1981 y 1990, aumentando el desempleo, mientras la población se terciariza sin haberse alcanzado una industrialización significativa.

Por otra parte, el centralismo de la capital se manifiesta fundamentalmente por la desigual distribución del ingreso a nivel nacional. Mientras en Lima el ingreso promedio es el doble que en el resto de otras regiones, los gastos públicos de los gobiernos centrales estuvieron en clara vinculación con la diferenciación existente a nivel metropolitano. Por ejemplo, se registra que entre 1964 y 1970, el Paseo de la República absorbió la mitad de la inversión total del municipio de Lima, constituyendo la ampliación de la vía expresa en los setenta el proyecto municipal más importante de esos años. Para 1980, la Zona Centro concentraba cerca del 50% de establecimientos ligados al sector terciario. Hay que destacar además que la concentración de capital existente en el centro financiero (principalmente San Isidro), tiene como característica principal el hecho de que las decisiones financieras de la banca comercial, estatal y privada se realizan en la Zona Centro.

1.5.9.2. Historia del conflicto armado interno

1.5.9.2.1. Inicio y expansión de la violencia: 1980-1988

Durante el ciclo de violencia política en la capital, podemos percibir hasta tres espacios o centros particulares en la Zona Centro, cada uno con una relevancia específica:

Centro antiguo: Correspondiente a los distritos más antiguos de la capital, como La Victoria, el Cercado, Breña y el Rímac. En este escenario se ubican principalmente los

monumentos históricos y el poder político, por lo que estuvo en la mira de los atentados subversivos desde principios de la insurgencia senderista y emerretista, a través de actos simbólicos y de una serie de atentados de diversa magnitud contra instituciones y autoridades estatales, e incluso contra instituciones vinculadas a gobiernos internacionales (embajadas, institutos, ONG's).

Centro industrial: Conformado por la parte industrial del Cercado de Lima alrededor del eje vial de la avenida Argentina, este espacio concentra gran parte de las industrias existentes en la Zona Centro. Hay que advertir que si bien el proceso de informalización de los noventa llegó a convertir el Cercado Antiguo en un eje dinámico del comercio ciudadano, gran parte del comercio formal y de la pequeña y mediana industria se localiza en esta sub zona, siendo también objeto de un temprano interés por parte de los grupos subversivos, a través de acciones de sabotaje, amedrentamientos y por medio de la convocatoria a paros armados, en estrecha vinculación con el accionar de la Carretera Central.

Centro financiero-comercial: Distritos como San Isidro, Miraflores, San Borja, Santiago de Surco y La Molina pueden ser ubicados como parte del eje financiero y residencial de la metrópoli, ubicados alrededor del eje vial conformado por la Vía Expresa, la avenida Javier Prado y las avenidas adyacentes, mientras Surquillo, Lince, Pueblo Libre, San Miguel, y San Luis destacan como sedes de diversas instituciones ligadas al sector terciario. Durante el período de la violencia también tenían un significativo peso comercial y a la vez estos distritos servían de residencia de la clase media urbana limeña.

Aunque el PCP-SL había iniciado su accionar en esta zona mediante el ataque de agencias bancarias, centros comerciales, y una sucesión de apagones y coches bomba, lo cierto es que había concebido estos distritos como área de operaciones para su dirigencia. En efecto, los principales aparatos senderistas (como el DAO, GAP, GTE) funcionaban en la zona residencial del centro de la capital, lugar en donde además se desarrolló de manera clandestina el I Congreso partidario del PCP-SL. Este Congreso senderista se realizó durante tres sesiones, en una zona que era residencia de militares (Monterrico Norte), en el inmueble donde funcionaba el Departamento de Apoyo Organizativo (DAO) a cargo de la abogada Elvia Nila Zanabria Pacheco, quien además era miembro del Comité Central. Los principales aparatos senderistas funcionaban en la Zona Centro de la capital. No sólo el local del Departamento de Apoyo Organizativo, también las redes del Grupo de Apoyo Partidario y el Grupo de Trabajo Especial vinculado a las Academias «Aduni» y «César Vallejo», constituían importantes aparatos del PCP-SL activos en la Zona Centro, a los cuales se agregaban las acciones de los organismos generados vinculados a Socorro Popular.

1.5.9.2.1.1. La estrategia subversiva

Al iniciar sus acciones, la directiva senderista tenía una concepción unitaria de la guerra popular siendo el campo el escenario principal y la ciudad el complemento necesario, que se expresó en el hecho de que, casi paralelamente al atentado en Chuschi de 1980, en Lima se producía el incendio de la municipalidad de San Martín de Porres, mientras aparecieron en diferentes distritos del centro antiguo una serie de actos simbólicos e intimidatorios (perros colgados injuriando al «revisonismo», cerros colindantes iluminados con la hoz y el martillo, voladura de torres eléctricas). Estos actos no llegaron a llamar la atención de la población citadina ni de la clase política, a excepción del apagón general producido en noviembre de 1981. Una hora antes, una turba de manifestantes provocó una serie de disturbios en la zona financiera y residencial, destruyendo las lunas de dos bancos en pleno centro de Miraflores y lanzando proclamas a favor de la lucha popular, con consignas como «la guerrilla es el camino».

A partir de 1982, el PCP-SL incrementó su accionar en la Zona Centro, atacando centros comerciales durante los apagones, así como realizando una serie de atentados y asaltos a policías, intensificándose la violencia a partir de mediados de los 80's.

1.5.9.2.1.2. La capital como caja de resonancia

Por su condición de capital nacional, y por el centralismo político y económico existente en el país, los atentados y acciones ejercidas en los distritos céntricos llegaron a tener un impacto mayor que los que ocurrían paralelamente en otros sectores del país. Es por ello que adquiere una relevancia específica la percepción del centro de Lima como caja de resonancia del accionar subversivo, tanto para el PCP-SL como para el MRTA. Aunque los planes militares del PCP-SL estaban enfocados en el desarrollo de sus bases de apoyo en el campo, existió una marcada orientación política por el accionar urbano y por los atentados en la capital, a pesar de la desigualdad de fuerzas existentes con respecto a las fuerzas del orden. En ese sentido, una aproximación a la «resonancia» del accionar subversivo se puede obtener a partir de las opiniones que se expresaron sobre el PCP-SL al inicio de la guerra interna; otra entrada se puede establecer en el tratamiento que distintos organismos internacionales asumieron frente al tema de los derechos humanos ; y finalmente podemos aproximarnos a la resonancia de los actos subversivos a partir de las imágenes que construyeron los medios de comunicación con respecto a la violencia política en Lima.

Las imágenes que los medios oficiales proyectaron sobre la violencia senderista fueron pasando de un enfoque criminológico a otro de carácter sensacionalista y nacionalista. A su vez, la concepción de Lima como caja de resonancia se puede extrapolar para entender el accionar del MRTA en la capital. Aunque el MRTA nunca proclamó haber llegado a un «equilibrio estratégico»

de las fuerzas en lucha, utilizó también la centralidad capitalina para obtener un mayor impacto de sus actividades subversivas.

Para el caso específico de la violencia en Lima, a nivel metropolitano existió un trato desigual entre lo que podemos denominar centro y periferia. Esto era expresión de otra tendencia dominante, como fue la indiferencia frente a la violencia en el contexto rural durante los ochenta. Pese a que en todo el país se declaró el Estado de Emergencia y se implantaron sucesivos toques de queda en la ciudad, los atentados en provincias no tuvieron la resonancia ni el impacto que obtuvieron los atentados en el centro de la capital.

Así, el caso más sonado ocurrido al interior del país a inicios de los ochenta fue la matanza de 8 periodistas de tres diarios limeños en la localidad de Uchuraccay, el 26 de enero de 1983. En contraste, las incursiones senderistas en Lucanamarca y Huancasancos (que juntas llegaban a los 80 muertos) en abril del mismo año, o la masacre de Socos por parte de las fuerzas policiales en noviembre de 1983, con un saldo de 34 campesinos asesinados, no recibieron mayor cobertura por parte de los medios. Por el contrario, sirvieron para cimentar una imagen delincencial del PCP-SL y fueron muestra del interés del gobierno en una estrategia represiva hacia la población campesina, que se suponía apoyaba al PCP-SL. La política contra subversiva estuvo centrada en censurar y distorsionar los hechos de violencia, y esto tuvo su impacto en la cobertura que la prensa otorgaba a la violencia política.

Sin embargo, desde el Estado se comenzaba a dictaminar una serie de dispositivos legales contra el terrorismo, mientras las Fuerzas Armadas afirmaban tener controlados a los grupos subversivos en las zonas de emergencias. Pero en Lima, e incluso en la Zona Centro, ya se había desatado una serie de atentados simbólicos, iniciados con perros colgados de postes en el centro de la ciudad. En la noche del 24 de noviembre de 1981, cerca de un centenar de personas protagonizaron una asonada en pleno centro de Miraflores, causando daños materiales en las sucursales de los bancos de Crédito y Continental de ese distrito. El grupo hizo estallar varias bombas molotov a los gritos de «abajo el gobierno», «la guerrilla es el camino» y «la guerrilla contra el hambre». Unas horas más tarde, aproximadamente a las 11 de la noche, se produjo un apagón que cortó el fluido eléctrico en toda la ciudad. El apagón se debió a la voladura de una torre de alta tensión en Chongos Bajo, Junín, que produjo un apagón general en Huancayo, Lima, Callao y otras ciudades. Al día siguiente, grupos identificados como subversivos intentaron transmitir proclamas tomando 2 radios en Lima. Los apagones se convertirán, en los años siguientes, en elemento central de la estrategia senderista, modificando incluso la rutina cotidiana de los millones de habitantes de la capital.

Luego de que en algunos lugares del interior del país se decretara el Estado de Emergencia, el 20 de agosto de 1982 fue declarado en Lima y Callao. Comenzaba así una serie de atentados en la capital, que a partir de mediados de los ochenta empezó a incluir de manera predominante asesinatos selectivos, así como una mayor infiltración dentro del movimiento barrial y sindical,

sumamente debilitado por la crisis económica y por la desarticulación gremial que esta conllevó. El avance del PCP-SL se expresa en la convocatoria a un paro el 8 de enero de 1983 en Lima Metropolitana, casi sin efecto alguno, pero a partir de 1985 el PCP-SL se infiltró en las huelgas convocadas por el CITE, central de trabajadores públicos.

Por parte del MRTA se inició una ola de secuestros y extorsiones, y en menor medida coches bombas y ataques de artefactos «instalaza» contra las sedes gubernamentales y contra sedes estadounidenses, así como la toma de medios y agencias noticiosas para relevar su accionar en el extranjero.

El 22 de enero de 1985, Amnistía Internacional distribuyó en Londres un comunicado manifestando que más de mil personas habían desaparecido en los últimos dos años en la zona declarada de emergencia en el Perú. El informe agregaba que cientos de otras personas fueron asesinadas durante su detención, a menudo tras ser torturadas. Responsabilizó al PCP-SL por el asesinato y la tortura de centenares de personas. A pesar de estas afirmaciones, los medios oficiales consideraban a esta organización de derechos humanos como fachada del terrorismo internacional, aunque ya no se podía negar la existencia de una «guerra sucia» en el interior del país. En efecto, en días anteriores, los diarios limeños daban cuenta de nuevos hallazgos de fosas con cadáveres de desaparecidos, así como de las incursiones criminales del PCP-SL en diversos puntos de la serranía peruana. Además, el 16 de julio de 1985 llegó a Lima la Comisión de Trabajo de Desapariciones Forzadas Involuntarias, de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas. El 16 de agosto de aquel año, el MRTA realizó una conferencia de prensa clandestina, señalando que «no realizará acciones militares contra el APRA, mientras éste no ataque al pueblo».

Durante el gobierno de Alan García, el caso de mayor resonancia fue la matanza de presos senderistas amotinados en los penales limeños en 1986, que conllevó a una ruptura con la línea oficial del gobierno y a un intento por comprender las causas del conflicto armado interno, por parte principalmente de opositores a la estrategia contra subversiva y de los organismos de derechos humanos. El amotinamiento de subversivos, los días 18 y 19 de junio de 1986 en el CRAS Lurigancho (124 muertos), en el CRAS El Frontón (más de 100 muertos), y en el CRAS «Santa Bárbara» (3 reclusas muertas), originó la mayor matanza colectiva de la historia de nuestro país.

Poco antes, el alcalde de Lima, Alfonso Barrantes (IU) insistía en la necesidad de formar un frente común contra el terrorismo, iniciativa que contó con el respaldo de la Iglesia Católica y el 14 de junio de ese año, el senador Javier Diez Canseco (PUM), manifestó que la posición del frente antiterrorista era de Alfonso Barrantes pero no de IU. Al día siguiente, un comunicado firmado por el PC del P (Patria Roja), PUM y FOCEP, planteaba «una salida de paz con justicia social, rechazando el terrorismo de cualquier signo» y pedía el fin del estado de emergencia en Lima y Callao. En diciembre de 1987 se convocó a una Jornada Cívica por la Paz y por la Vida, con la participación de una amplia variedad de instituciones, autoridades y partidos políticos y un año

después la municipalidad de Lima convocó a una Jornada por la Paz. En el marco de la sesión solemne celebrada en el Consejo Provincial de Lima, el alcalde de Lima, Jorge del Castillo (APRA), propuso instituir 1988 como el Año de la Paz Nacional, con el nombramiento de una comisión que recomendaría las acciones conducentes a esta tarea. Villa El Salvador, la «Ciudad Mensajera de la Paz», guardó un minuto de silencio por la paz y por el cese de toda forma de violencia en el territorio patrio bajo el lema «Sin justicia no hay paz». Por su parte, el regidor Henry Pease (IU) recordó que más de diez mil peruanos habían sido víctimas de la violencia, la cual, remarcó, era preciso detener. Reclamó, en ese sentido, la supremacía de las instituciones civiles en las zonas de emergencia como un paso adelante en la defensa de los derechos humanos.

Pero estos esfuerzos por cohesionar la sociedad civil en un frente único por la paz, no tuvieron éxito y la violencia mantuvo su intensidad en Lima. En medio del paro nacional convocado por la CGTP, un grupo de 40 senderistas se enfrentó con los manifestantes en plena Plaza Dos de mayo, en un intento de atentar contra Jorge del Prado, senador líder de la Izquierda Unida, el 28 de enero de 1988. Era evidente que no existía una colusión entre los huelguistas y los senderistas, ni siquiera en las marchas infiltradas por grupos pro senderistas, como quiso atribuirlo en un primer momento el gobierno, que pretendía minimizar la presencia de los grupos subversivos en la capital.

En mayo de 1988, con motivo de la segunda visita de Juan Pablo II a Lima, también se registró un incremento de la violencia en la capital. Familiares de presos del MRTA tomaron diversas iglesias, mientras elementos senderistas colocaron dinamita cerca al Campo Eucarístico de San Miguel. Poco antes se había desactivado un coche bomba cerca de la Base Aérea N° 8.

1.5.9.2.2. La escalada de la violencia del PCP-SL: 1989-1992

Hasta 1989, los apagones y paros armados eran considerados como acciones alejadas de los distritos céntrico-residenciales, pero el aparente avance de la lucha armada frente a la ineficacia de la política contra subversiva llevó a que la directiva senderista considere propicio expandir y desarrollar el «Quinto Plan» teniendo como objetivo impulsar el desarrollo de bases de apoyo, centrándose en la construcción del nuevo poder. Es decir, se buscaba destruir el aparato estatal y generar un vacío de poder, incluso mediante el asesinato de dirigentes vecinales, mientras se pretendía demostrar a la población el avance de la guerra popular incrementando las acciones terroristas a través de coches bombas y atentados localizados primordialmente en el centro comercial y financiero de Lima. Este repunte tuvo lugar desde agosto de 1989, y alcanzó su mayor intensidad entre abril de 1991 y julio de 1992.

A fines del régimen de Alan García (1985-1990), la situación económica se caracterizó por una hiperinflación de 60% mensual, una reducción de los salarios reales en 50% respecto a julio de 1985, y apenas 107 millones de dólares en reservas internacionales. El sistema financiero había

visto reducir sus niveles de intermediación a la tercera parte del nivel alcanzado en 1982, mientras la presión tributaria llegó apenas al 4% del PBI, y el déficit fiscal representaba el 12% del PBI. En este escenario, el accionar de los grupos subversivos se recrudece notablemente, afectando de manera desproporcionada al centro económico y político del país, con una resonancia insospechada, en su mayor parte debido al enfoque sensacionalista por parte de los medios de comunicación, en medio del cambio de régimen presidencial y modificaciones en la estrategia contra subversiva.

En vísperas de las elecciones presidenciales de 1990, el MRTA secuestró al empresario Héctor Delgado Parker, lo que le permitió tener una tribuna momentánea a través del canal 5. En enero de 1990, el mismo grupo asesinó al General Enrique López Albújar en San Isidro, ex ministro de Defensa. Mientras tanto, el PCP-SL multiplicaba sus asesinatos de funcionarios vinculados con el gobierno aprista, como fue el caso de Felipe Santiago Salaverry, ex Presidente del IPSS. Todos estos actos fueron generando una percepción de caos e incertidumbre generalizada asociada, en medio de apagones continuos, a la crisis económica que alcanzó, como dijimos, niveles hiperinflacionarios sin antecedentes. El impacto que tuvieron los atentados subversivos a las instalaciones comerciales y la infraestructura estatal agravó esta percepción, sin que la declaración de estados de emergencia y la creación de comandos político-militares mejorase la situación. Por el contrario, se empezaron a manifestar amenazas al periodismo de investigación, uno de cuyos precedentes fue el cierre del programa televisivo Encuentros, conducido por César Hildebrandt, suspendido en vista de las presiones que venían afectando las informaciones sobre el caso de Jaime Ayala. Hildebrandt denunció que las Fuerzas Armadas habían obligado a los directivos de todos los canales de televisión para evitar que se informe sobre cualquiera de los militares involucrados en algún tipo de delito.

A partir de octubre de 1989 las acciones subversivas se incrementaron en más del 100%, con miras a las acciones a realizarse a partir de marzo de 1990 en el objetivo de impedir las elecciones presidenciales. Esta etapa de ascenso se prolongó hasta agosto de 1990, siendo principales objetos de atentados los centros comerciales y las unidades de transporte en la capital. Se inició un proceso de racionamiento eléctrico que afectó la actividad comercial e industrial. Con el nuevo gobierno de Alberto Fujimori, se reactivaron las acciones subversivas en la capital, registrándose en abril de 1991 desde voladuras de torres y atentados a agencias bancarias, hasta un atentado contra el local del Instituto Libertad y Democracia, que dirigía Hernando de Soto, en ese entonces asesor de Fujimori.

La modalidad de los coches bomba sufrió un repliegue entre agosto y septiembre de 1992, para luego volver a ascender, llegando a 14 en noviembre y a 10 en diciembre de ese año, aunque el número de víctimas se redujo considerablemente. En el balance de cientos de atentados, se observa que Lima fue el escenario de mayores acciones subversivas en 1992, registrando más de la mitad de los actos subversivos de todo el país. En cuanto a víctimas, el PCP-SL aparecía en el

tercer lugar, siendo los meses de su mayor actividad subversiva febrero, julio y noviembre, con el despliegue de una oleada de acciones en la capital que buscaban garantizar los paros armados que había convocado. Una de las acciones más sanguinarias en esos paros fue el asesinato de taxistas, muchos de los cuales eran quemados vivos en sus vehículos. En el ámbito metropolitano, la mayor cantidad de civiles muertos pertenecía al sector de los dirigentes populares, con un total de 27 dirigentes vecinales muertos, 5 dirigentes políticos locales, 7 ex dirigentes, 3 sindicalistas y 73 pobladores de distinta ocupación. Como se ha recalcado en otras zonas de Lima Metropolitana, estas acciones y procedimientos subversivos se enmarcaban dentro del plan del PCP-SL de lograr el llamado «equilibrio estratégico».

1.5.9.2.2.1. Los aparatos centrales del PCP- SL

La Dirección Central del PCP-SL, desarticulada con la captura de Guzmán en setiembre de 1992, estaba conformada por el Buró Político y el Comité Permanente (Ver Estudio de la CVR sobre el PCP-SL). Era responsable de elaborar las directivas del partido que llegaban a los comités y aparatos centrales a través del Departamento de Apoyo Organizativo (DAO) que funcionó hasta junio de 1990 en Monterrico Norte, fecha en que fue allanado por la policía. La Dirección Central, dirigida por Guzmán, estuvo ubicada en Chacarilla del Estanque. Ambos inmuebles estaban a sólo cinco minutos de distancia. Como resultado del allanamiento del DAO, recién se llegó a conocer la verdadera presencia del estado mayor senderista en Lima. Entre los documentos incautados se halló información que permitió la detención de miembros operativos en el Grupo de Trabajo Especial (GTE) y del Grupo de Apoyo Partidario (GAP).

El GAP empezó a actuar con grupos que dependían directamente de la Dirección Central. A mediados de 1985 se conformó un organismo que se desarrolló en la ciudad como parte del Movimiento Revolucionario de Defensa del Pueblo (MRDP). Al caer el DAO, el GAP contaba con una organización muy compleja, clandestina, y con tres redes de trabajo en la ciudad: una red de locales, la red de recojo, almacenamiento y distribución de propaganda, y la red de economía e inteligencia. Algunos analistas aseguran que el manejo de los depósitos de propaganda del PCP-SL era más importante que manejar el Ejército Guerrillero Popular.

Por su parte, Socorro Popular (llamado SoPo en documentos de PCP-SL) contaba con una estructura muy compleja y, a partir de su militarización desde 1986, llegó a desplazar al Comité Metropolitano en importancia, logrando expandirse sin dejar de cumplir sus funciones iniciales abocadas a las áreas de salud y defensa. Casi siempre actuaba a través de sus «organismos grises» o «de fachada», como la Asociación de Abogados Democráticos y el Comité de familiares de presos políticos. En cinco años, bajo la jefatura de Yovanka Pardavé, esta organización se convirtió en uno de los aparatos centrales claves del PCP-SL en Lima. Con la captura de esta dirigente, conjuntamente con Tito Valle Travesano y Víctor Zavala Cataño, en junio de 1991, la célula fue

recompuesta, asumiendo la dirección la abogada Martha Huatay, quien finalmente fue capturada en octubre de 1992, obligando a SoPo a nuevas pero frágiles recomposiciones.

1.5.9.2.2.2. La estrategia *contrasubversiva*

Es necesario destacar que en Lima Metropolitana, entre 1980 y 1990, se llegó a declarar el Estado de Emergencia 6 veces a nivel departamental, desde la primera vez el 9 de marzo de 1983, y hasta 29 veces a nivel metropolitano, instaurándose el toque de queda sucesivas veces, desde febrero de 1986, casi simultáneamente con los estados de excepción.

En marzo de 1981, se había promulgado el DL N° 046, que tipificaba el delito de terrorismo y establecía penas contra quienes incurrieran en él. Varios dirigentes populares fueron detenidos merced a este dispositivo legal. Sin embargo, es recién en los 90's cuando, a través de una serie de decretos que estableció el régimen de Fujimori y por los cuales se establecía la centralidad de los trabajos de inteligencia, fueron posibles las capturas de los mandos subversivos del PCP-SL y el MRTA,. De otra parte, con dicho gobierno se inició un proceso de control y militarización de los espacios universitarios, con dispositivos que violentaban flagrantemente la autonomía universitaria, mientras se consideraba a los penales como escuelas de formación de terroristas.

Para algunos mandos militares y policiales, estos mecanismos de represión contra subversiva no eran suficientes pues se ceñían, a pesar de los abusos, a la legislación antiterrorista lo cual impedía una represión selectiva más brutal. Aunque sus operaciones datan de algún tiempo atrás, el Grupo Colina recién es conocido por la opinión pública el 3 de noviembre de 1991, cuando asesina, en Barrios Altos, a 16 personas que participaban de una pollada, dejando a otras cuatro gravemente heridas.

El incremento desbordante de la acción subversiva fue uno de los factores del elevado margen de aprobación al golpe de estado del 5 de abril de 1992, el mismo mes en que un enfrentamiento en Raucana murieron 3 pobladores y Peter Cárdenas Schultz, uno de los líderes del MRTA, es capturado. La polarización militar influyó en las matanzas del penal de Canto Grande y en el secuestro y desaparición de un profesor y nueve estudiantes de La Cantuta, ejecutados por el Grupo Colina en julio de 1992 y conocido públicamente un año después. Señalemos que el 9 de mayo de 1992 una intervención policial, denominada «Mudanza Uno», en los pabellones senderistas del penal de Canto Grande con motivo de trasladar a más de 100 mujeres hacia la cárcel de Chorrillos, originó el asesinato de 35 reclusos acusados por terrorismo, entre los cuales se encontraban Hugo Deodato Juárez Cruzatt, integrante del Buró Político del PCP-SL, y los responsables de Socorro Popular, Yovanka Pardavé Trujillo y Tito Valle Travesano. Junto con esta represión sangrienta, el gobierno concibió normas que pretendían desactivar los grupos

subversivos, es así que el 12 de mayo, cuando la matanza del penal de Canto Grande aún repercutía en la opinión pública, promulga la que se conoce como Ley de Arrepentimiento-

Año particularmente violento, en 1992 se registró más de la mitad de los atentados subversivos en todo el país, con el despliegue de una oleada de acciones en la capital que buscaba garantizar los paros armados que el PCP-SL convocaba. Tal vez el mayor impacto logrado por el PCP-SL en este período fue el estallido de coches-bomba en Lima, que llegaron a sumar un total de 46 en el período 1991-1992. Aunque la mayoría estaban dirigidos contra comisarías o agencias bancarias, formando parte de una estrategia central en la escalada de violencia, particularmente impactantes fueron los que estallaron el 5 de junio de 1992 en la sede del Canal 2, que causó la muerte de tres trabajadores y, sobre todo, la del 16 de julio en la calle Tarata, en pleno centro comercial de Miraflores, donde murieron 23 personas y más de 100 quedaron heridas.

El éxito mayor del trabajo de inteligencia policial desemboca en la captura de dos principales dirigentes de las organizaciones subversivas ese mismo año: el 9 de junio de 1992 es recapturado el dirigente del MRTA Víctor Polay Campos, «camarada Rolando», en San Borja y el 12 de setiembre el GEIN de la policía captura a Abimael Guzmán y a una parte de la cúpula senderista.

1.5.9.2.3. El final de la violencia: 1993-2000

Estas capturas fueron quizás más determinantes en la derrota de los grupos subversivos que las iniciativas de la sociedad civil de consolidar un frente por la paz, prácticamente desaparecidas en los 90's, a excepción de la reacción frente a los atentados simultáneos que se desarrollaron durante la escalada senderista de julio de 1992, que motivaron el 19 de julio de 1992 una Marcha por la Paz en Miraflores, convocada por el municipio miraflorentino y que contó con la presencia del ministro de Economía, miembros del Ejecutivo y ex parlamentarios. A pesar del grado de vulnerabilidad de las organizaciones y las autoridades periféricas frente a la violencia, las muertes y detenciones no implicaron que el discurso de la pacificación se tornara hegemónico, algo que recién ocurrió al sentirse directamente agredidas las clases dirigentes y los residentes de los distritos financieros residenciales del centro capitalino. Como parte de las manifestaciones simbólicas, se consolidó una imagen que externalizaba al PCP-SL, como el enemigo que atacaba al corazón de la nación, imagen que se alimentaba del prejuicio y de la indiferencia que durante años se manifestaron en el manejo de la información por parte de los medios oficiales.

El repunte de la violencia en 1991 y 1992 correspondió, sin embargo, con la simultánea derrota de la estrategia subversiva, gracias a la captura de sus principales cuadros, como fue el caso de Abimael Guzmán y Víctor Polay. La resonancia política de estos hechos fue capitalizada por el gobierno fujimorista, que logró la reelección presidencial para el período 1995-2000 con un discurso que apelaba a la pacificación nacional frente a la amenaza de la violencia subversiva, que

para entonces estuvo notablemente replegada en el interior del país. Desde 1993 podemos decir, siguiendo nuestra periodización, que hay un declive de las acciones subversivas en la capital fruto de la captura de sus principales líderes y luego, en el caso del PCP-SL, merced a la suscripción de las cartas de paz por sus principales líderes presos. En efecto, en noviembre de 1993 se conoce la división surgida al interior del PCP-SL entre los seguidores de Abimael Guzmán y su acuerdo de Paz, y aquellos de «Feliciano» que pretenden seguir desarrollando la lucha armada. En diciembre, trescientos presos senderistas de Canto Grande se adhieren a las cartas de Abimael Guzmán.

Con la captura de Guzmán las acciones del PCP-SL no cesaron, pero paulatinamente fueron decreciendo los atentados en la ciudad. Este periodo se enmarca en el contexto de consolidación del régimen de Fujimori que ganó credibilidad en los sectores populares de Lima. Las cartas de Guzmán por un Acuerdo de Paz, la captura de los principales dirigentes nacionales del PCP-SL y el MRTA, el viraje de la estrategia contra subversiva de las FFAA hacia acciones de inteligencia y asesinatos selectivos como los realizados por el grupo Colina, además de la legislación antiterrorista, hicieron que se despejara la certidumbre en la opinión pública que el PCP-SL iba ganando la partida.

De otra parte, el MRTA sufre otro golpe rotundo el 30 de noviembre de 1995 con la detención de Miguel Rincón Rincón, importante miembro de la cúpula del MRTA.

Una de las últimas acciones ejecutadas por el PCP-SL en Lima ocurre el 6 de marzo de 1996 cuando tres de sus militantes, entre ellos una mujer, asesinan a Pascuala Rosado, dirigente popular y lideresa de Huaycán. El final del ciclo de violencia, y además el acto de mayor repercusión internacional, ocurrirá a fines de ese año, el 17 de diciembre, día en el cual un comando de 14 miembros del MRTA toma por asalto la residencia del embajador japonés, reteniendo 74 rehenes por varios meses hasta el 22 de abril de 1997, cuando la llamada «crisis de los rehenes» termina con la intervención militar y un saldo de 17 víctimas: el vocal de la Corte Suprema Carlos Giusti, dos oficiales del Ejército y los 14 emerretistas que asaltaron la residencia, algunos asesinados luego de su rendición.

1.5.9.2.4. Resumen

En 1980, los distritos que conformaban la Zona Centro de Lima Metropolitana experimentaron de manera diferenciada el proceso de la guerra interna. Mientras el centro histórico era escenario de las primeras incursiones simbólicas de los grupos subversivos, a partir de mediados de los ochenta esta situación se expandió, con fuertes atentados explosivos en el centro comercial, llegando a declararse en sucesivos momentos el Estado de Emergencia en la capital desde agosto de 1982. Con el cambio de gobierno y de la estrategia contra subversiva, la violencia en la ciudad se tornó más selectiva, a través de asesinatos a dirigentes populares, altos mandos de las fuerzas armadas y funcionarios estatales, adquiriendo resonancia los secuestros y atentados contra personalidades

políticas o empresariales del centro de la capital, la principal caja de resonancia de los grupos alzados en armas.

La diversidad de ataques y mecanismos de propaganda, actos intimidatorios y coerción de los dirigentes llegaron al paroxismo con la violencia desatada entre 1989-1992, en donde la batalla final por el poder pasaba por la conquista de la Zona Centro, como centro económico y político de la nación. La Zona Centro de Lima concentró, en 1992, la mayor cantidad de atentados de todo el país.

A pesar de la sucesión de actos de violencia de años anteriores, los medios de comunicación generan una percepción distante y estereotipada de la guerra interna. Sin embargo, esta situación cambió con el progresivo ataque sistemático al centro financiero, fomentándose la imagen de una posible conquista del poder por parte del PCP-SL, cuya dirigencia central residía en esta Zona Centro. Lejos de estar cercano al triunfo, alcanzando el pico de violencia más alto en 1992, el PCP-SL de modo simultáneo empezaba su caída y el Estado asumía plenamente la iniciativa con la captura de los principales cuadros del PCP-SL y el MRTA en los distritos céntricos.

Fujimori pudo capitalizar los logros de la estrategia contra subversiva y logró la reelección por un nuevo mandato, consolidando sus redes clientelares y de corrupción. Esto generó un malestar social, que fue momentáneamente opacado por la solución militar que se dio a la denominada «crisis de los rehenes», en abril de 1997, y en el tratamiento noticioso que se dio a la captura de Oscar Ramírez Durand «Feliciano», en julio de 1999, mediante lo cual Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos llegaron a presentarse como los artífices de la pacificación nacional.